

CAPÍTULO III

AMÉRICA LATINA EN LA INMEDIATA POSGUERRA (PRIMERA PARTE)

BOLIVIA, GUATEMALA Y ARGENTINA HASTA LA CAÍDA DEL RÉGIMEN

PERONISTA EN 1955

1.- En los años 1950-1970, América Latina era una verdadera olla a presión y estaba grávida de revoluciones. Su creciente integración en el mercado mundial y el boom demográfico agudizaba y generalizaba los antagonismos agrarios¹. La emigración acelerada del campo a las ciudades generaba grandes masas proletarizadas que se hacían en las villas miserias y caían en la marginalización. Como resultado de la crisis de los años 1930 y de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de una industria manufacturera en Argentina, Brasil y México había dado lugar a un proletariado fabril que venía a engrosar las masas obreras urbanas empleadas en los ferrocarriles, los transportes, los puertos, la construcción, la industria de la alimentación, las usinas eléctricas, los frigoríficos, creando un nuevo contexto social. Por otra parte, el surgimiento de estas industrias creaba nuevos problemas económicos, financieros y sociales que habrían de generar conflictos entre las clases dominantes mismas. *Last but not least*, la dominación imperialista sobre Latinoamérica y el carácter dependiente de sus economías nacionales alimentaba la marea antiimperialista que la Internacional Comunista había previsto en su Segundo Congreso de 1920 y que el “*Llamamiento al proletariado de ambas Américas*” había vaticinado.

En la segunda posguerra, la ola anticolonial que se esparció por Asia y luego por África también alcanzó a Latinoamérica. Aquí debió enfrentarse con el alineamiento contrarrevolucionario de fuerzas que iban del imperialismo estadounidense al entramado de las clases nacionales compuesto por las oligarquías terratenientes arcaicas y en vías de modernización, las burguesías comerciales y financieras locales, y una burguesía industrial nacida tardíamente en un contexto en que el imperialismo dominaba mundialmente y en el que las masas obreras poseían tradiciones de organización y de lucha importadas por los inmigrantes de Italia y España.

¹ La expresión más elocuente de ello han sido las guerrillas campesinas peruanas y las de América Central en los años 1960-1980, así como las colombianas que de manera ininterrumpida se han prolongado desde los años 1950 hasta la actualidad. El artículo citado de Alejandro Reyes Posada, “La violencia y el problema agrario en Colombia”, describe sintéticamente la complejidad de los antagonismos agrarios presentes igualmente en otros países de la región.

La Internacional consideró en 1920 la posibilidad de una *revolución antiimperialista* a escala del subcontinente, con el proletariado a la cabeza de las masas campesinas². Tras la emergencia de un proletariado fabril en los países latinoamericanos más importantes, las *bases objetivas* de esta perspectiva continental estaban aún más presentes en los decenios 1950-1970.

2.- Como las cadenas se rompen por los eslabones más débiles, el primer proceso revolucionario latinoamericano de la posguerra ocurrió en Bolivia a partir de 1946 y alcanzó su ápice con la insurrección popular de 1952. Se trató de un clásico proceso revolucionario democrático-burgués. A diferencia de la Revolución rusa de 1917, el proletariado se vio privado de la ventaja que le dio su participación en la caída del gobierno y en la destrucción del Ejército, y a pesar de haberse armado quedó embretado por el Partido comunista (que respondía al estalinismo abiertamente contrarrevolucionario) y por el centrismo trotskista personificado por el POR de Guillermo Lora (partido éste que actuó como ala izquierda de la democracia burguesa). Gracias a las políticas de estas dos corrientes, los gobiernos del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pudieron evitar la radicalización de la revolución e impedir que el proletariado llegase a movilizar a las masas campesinas e indígenas para quebrar el poder de los terratenientes, de la burguesía boliviana y del imperialismo³.

3.- Un ejemplo de características reformistas y legalistas estuvo representado en Guatemala por los gobiernos de Juan José Arévalo (1944-1951) y Jacobo Árbenz (1951-1954), este último derrocado por una intervención militar organizada y financiada por los EE.UU. en defensa de los intereses de la United Fruit Company⁴ (UFCO) y de los latifundistas locales.

² Es de señalar que el *Llamamiento* de la Internacional no se refirió a posibles movimientos nacional-revolucionarios contra la dominación imperialista en Latinoamérica, es decir, a la presencia de fuerzas sociales capaces de luchar revolucionariamente contra el status quo continental, y no simples movimientos democrático-burgueses incapaces de plantearse tales objetivos. Aunque sin referirse específicamente a América Latina, las Tesis sobre la cuestión nacional y colonial del II Congreso sí abordaron el problema para las áreas coloniales y semicoloniales [cf. Carlos N. Svidler, *op.cit.*, capítulo V, §9].

³ Para acceder a un relato de la Revolución boliviana exento de la mitología difundida por las corrientes trotskistas, cf. “La epopeya del proletariado boliviano - La lucha de clases en Bolivia hasta 1981”, publicado de manera anónima en 1981 como *Cuaderno n°1 de El Proletario*. [http://www.pcint.org/40_pdf/18_publication-pdf/ES/Epopeya-proletariado-boliviano.pdf]

⁴ Esta compañía poseía más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que sólo trabajaba una ínfima parte. Los monopolios norteamericanos de empresas subsidiarias de la UFCO se dedicaban al transporte de carga por ferrocarril y vapores, los que salían de Puerto Barrios controlado por la UFCO. Asimismo, controlaban la generación de la electricidad, los teléfonos y telégrafos del país.

En cuanto representantes impotentes de la democracia burguesa, estos gobiernos consideraron la posibilidad de promocionar legalmente reformas que no pretendían alterar significativamente los poderes, las estructuras, las relaciones sociales existentes y la presencia del imperialismo⁵, y no se dieron los instrumentos políticos y sociales para atacar a las clases dominantes y a la situación semicolonial de Guatemala. Ambos gobiernos fueron “repeticiones generales” de lo que 10 años después ocurrirá en Brasil bajo el gobierno de Goulart y 20 años más tarde sucederá en Chile con el Gobierno de Salvador Allende. La patética caída del gobierno de Árbenz fue la de una muerte anunciada.

ARGENTINA

4.- En condiciones históricamente excepcionales, un intento reformista más consistente para resistir al imperialismo estadounidense y a los sectores más reaccionarios de las clases dominantes estuvo representado en Argentina por los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955).

En este país, la crisis de 1929 tuvo dos efectos de largo alcance. *En primer lugar*, la liquidación en 1930 de la democracia burguesa vigente desde 1916 tras la elección - con el sistema de voto universal masculino y secreto - de Hipólito Yrigoyen, el dirigente del Partido Radical. Este partido sólo representaba a lo que Marx llamaba la “democracia pura”, un amasijo de sectores sociales sin intereses bien definidos que incluía a la burguesía liberal, a profesionales, intelectuales y pequeños burgueses en todos sus matices. *En segundo lugar*, el inicio de un proceso de industrialización.

El golpe de Estado militar de 1930 inauguró el período del “fraude patriótico” que se prolongará hasta el golpe de Estado de 1943 y la instauración de un régimen militar que se perpetuará hasta 1946. En la llamada “década infame”, la vieja oligarquía - que junto con la burguesía comercial

⁵ El Código del Trabajo del gobierno de Arévalo pretendió suprimir jurídicamente las relaciones semi serviles del campesinado con los grandes propietarios (*sin socavar empero las bases materiales mismas de ese tipo de relación*) y establecer un principio de seguridad social, pero fue tan inocuo que no se atrevió siquiera a instituir un salario mínimo. La reforma agraria prevista por el gobierno de Arbenz intentaba beneficiar a 100.000 campesinos con la *expropiación con indemnización - a cargo de los campesinos mismos - de tierras ociosas* (acaparadas por las grandes plantaciones para evitar la caída de los precios de mercado del banano. La creación de un nuevo puerto, de una carretera al Atlántico y de una usina hidroeléctrica pretendían introducir a hurtadillas una competencia allí donde las compañías norteamericanas gozaban de un monopolio.

y financiera controlaba todos los resortes del Estado⁶ - se debatió para tratar de mantener su dominación de clase sobre una sociedad en plena transformación.

En aquellos años Argentina tenía menos de 16 millones de habitantes y su población rural superaba el 38% del total (del cual el 95% de la población activa correspondía a trabajadores sin tierra, pequeños propietarios, arrendatarios y medieros, estos últimos en condiciones de total precariedad).

5.- La Segunda Guerra Mundial tuvo como consecuencia la pérdida de influencia del imperialismo inglés en Argentina. Hasta ese momento, en el terreno económico Argentina había sido *objetivamente* parte integrante del Commonwealth y su economía dependía de la entrada en el mercado inglés de sus productos agropecuarios. La importación de productos industriales manufacturados y de insumos industriales (fundamentalmente de Inglaterra y EE.UU.) requería las divisas obtenidas gracias a la exportación de los productos del agro⁷.

La crisis de la década de 1930, con la fuerte depreciación de la producción agrícola exportada y la caída del volumen de sus exportaciones, así como más tarde la Guerra de 1939-1945, crearon las condiciones para el inicio del proceso de sustitución de importaciones con la fabricación en el país de productos de la industria liviana. Tanto más cuanto que durante la guerra los montos de los pagos de las exportaciones argentinas a Gran Bretaña quedaron bloqueados en libras esterlinas.

En ese período aumentaron tanto el número de establecimientos fabriles (que de 40.606 en 1935 subió a 57.940 en 1941 y a 84.440 en 1947) como el del personal empleado (que pasó de

⁶ Entre 1910 y 1943 cinco de los ocho presidentes de la Argentina y todos los ministros de la Agricultura entre 1910 y 1932 fueron miembros de la Sociedad Rural, la organización de los grandes latifundistas del país.

⁷ A cambio del derecho de exportación de al menos 390 mil toneladas de carne enfriada, el Tratado Roca-Runciman, firmado el 1 de mayo de 1933 entre Argentina y Gran Bretaña, establecía que : a) sus precios de venta debían ser inferiores a las importaciones de las colonias inglesas (Canadá, Australia, Sudáfrica); b) el 85 % de las exportaciones de carnes a Inglaterra debía realizarse a través de frigoríficos extranjeros; c) la Argentina dispensaría a las empresas británicas "un tratamiento benévolo"; d) todo lo que Gran Bretaña pagara por compras en la Argentina podía volver al país deduciendo un porcentaje para pagos de deuda externa; e) la Argentina mantendría libres de aranceles el carbón y demás mercaderías que se importaban en ese momento, comprometiéndose a comprar en Gran Bretaña el total del carbón que consumía; f) los aranceles aduaneros no fuesen aumentados. Además, le atribuía al Reino Unido el monopolio de los transportes de Buenos Aires. Estableció también la creación del Banco Central de la República Argentina con competencias para emitir billetes y regular las tasas de interés bajo conducción de un directorio con participación de funcionarios del Commonwealth.

597.000 en 1935 a 900.000 en 1941 y a 1.023.000 en 1947). El PIB industrial fue duplicado entre 1935 y 1939 y volvió a duplicarse durante la guerra.

Se trataba mayormente de establecimientos artesanales y de pequeñas y medianas empresas, y en la mayoría de los casos con tecnologías obsoletas⁸. En este período un sector de la oligarquía terrateniente misma invirtió no solamente en el comercio y las finanzas, sino también en grandes empresas del sector industrial.

Desde la Primera Guerra Mundial, el comercio internacional de la Argentina funcionaba en base a la triangulación de los flujos comerciales y financieros con Inglaterra y EE.UU. El saldo deficitario de Argentina en su balanza de pagos con EE.UU. era compensado con su saldo excedente con Inglaterra. A causa de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra no pudo sostener los flujos de inversiones y satisfacer las necesidades del mercado argentino, por lo que la triangulación precedente se volvió inoperante. La decadencia de Inglaterra como potencia mundial planteaba una encrucijada histórica a las clases dominantes argentinas.

La burguesía terrateniente, los grandes productores de granos y de carne (competidores de los EE.UU. en esos rubros) querían mantener prioritariamente los lazos históricos con el Reino Unido. Otro sector de la gran burguesía, más consciente del agotamiento del “modelo agro-exportador”, apostaban a un proceso de industrialización adosado a la potencia estadounidense. En medio de la crisis capitalista y la guerra, los enfrentamientos entre sectores burgueses (unos - los anglófilos - a favor de la neutralidad, los otros – intervencionistas pro estadounidenses) provocaron fuertes tensiones y constantes repercusiones en un sistema político gangrenado por la corrupción, los fraudes electorales “patrióticos”, los contubernios y corrupciones de todo tipo, dando lugar a un estado crónico de crisis política⁹. Por otra parte, la gran masa de los burgueses industriales surgidos durante la crisis al margen de la oligarquía y del imperialismo no se habían izado a una conciencia y a una voluntad de clase¹⁰. Esa situación terminó por desembocar en el golpe de Estado de junio de 1943 y la instauración de un régimen militar.

⁸ En 1939 sólo el 2% de los establecimientos empleaban a más de 100 trabajadores y el 13% contaba entre 11 y 100 empleados. 9 años más tarde, en 1948, el promedio de trabajadores en las empresas fabriles era de 12,4, cuando en los EE.UU. era de 60,1. *Fuentes* : Mario Rapoport, “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)”, Ediciones Macchi, 2003, p. 325 y Diego Rubinzal, “Historia económica argentina (1880-2009)”, Ediciones del CCC, 2010, pp. 163-163.

⁹ Para acceder a un relato detallado de la situación política durante el período que va de 1940 a 1943, cf. Alain Rouquié, “Pouvoir militaire et société politique en République Argentine (1943-1973)”, capítulo 7, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978.

¹⁰ Hasta 1952, año en que el gobierno peronista impuso la constitución de la Confederación General Económica, la única organización de los industriales fue la UIA, dominada por los monopolios extranjeros.

En un contexto internacional caracterizado por el ocaso del imperialismo inglés, el ascenso del norteamericano, el agotamiento del “modelo” agro-exportador y la crisis política crónica, las elecciones previstas con un candidato “cantado” de la rancia oligarquía y el previsible fraude electoral masivo provocó la caída del último gobierno de la “década infame” y la instauración de una dictadura militar que - a partir del gobierno del General Farrell (febrero de 1944) - consiguió crear en el curso de dos años nuevas alianzas de clase y las condiciones de una salida política signada por la resistencia al avance prepotente del imperialismo americano¹¹, la cooptación estatal del movimiento obrero y la profundización del industrialismo de Estado iniciado por los gobiernos precedentes. Esta etapa desembocará en la instauración de un régimen bonapartista democráticamente elegido encabezado por Juan Domingo Perón, el que durará de 1946 a 1955.

DEL GOBIERNO MILITAR AL RÉGIMEN PERONISTA (1943-1946)

6.- Más allá de los acontecimientos previos que lo desencadenaron, el golpe de Estado de junio de 1943 dio lugar a la toma del poder por altos mandos del Ejército (principalmente coroneles) guiados por cuatro objetivos prioritarios : acabar con el régimen políticamente exhausto instaurado por el golpe militar de 1930, mantener la neutralidad argentina en el conflicto mundial¹², proseguir el proceso de industrialización del país y prevenir cualquier situación revolucionaria proveniente de las masas trabajadoras¹³.

El objetivo de la neutralidad requería resistir a las constantes presiones de los EE.UU. para que Argentina declarase la guerra a Alemania (como ya lo habían hecho Brasil y México en 1942). Inglaterra prefería la neutralidad de Argentina para preservar de ataques de los submarinos alemanes a los barcos argentinos que abastecían a Gran Bretaña. La insistencia de los EE.UU. no tenía por objetivo la contribución del Ejército argentino al esfuerzo bélico de los Aliados, sino consagrar el ingreso del país en la órbita de influencia estadounidense.

¹¹ Esta situación llevó al boicot económico de Argentina y al congelamiento de sus tenencias de oro en los bancos de EE.UU.

¹² Si bien la victoria alemana en la guerra ya era vislumbrada como muy problemática en ese momento, la simpatía por una victoria alemana estaba muy extendida en la oficialidad del Ejército argentino.

¹³ Según el ministro de la Guerra, Edelmiro Farrell, uno de los principales objetivos del golpe de Estado era “prevenir los peligros de la época próxima de la posguerra”. *Revista militar*, junio de 1944, citado en A. Rouquié, *op.cit.*, p. 338. En 1942, el todavía coronel (y más tarde general) Manuel Savio, promotor de la industrialización estatal, había escrito en la *Revista Militar* de diciembre de 1942 : “*El peor aspecto de la posguerra será el caos económico*”.

La prosecución del proceso de industrialización era compartida por gran parte de la oficialidad del Ejército para evitar en la posguerra una involución económica del país como resultado de la desaparición de los factores que habían dado lugar al proceso de sustitución de importaciones, para evitar la crisis social que resultaría de ella y para impedir que en el terreno armamentista la Argentina fuese superada por Brasil (país que estaba aprovisionado por EE.UU.).

La prevención de toda eventualidad revolucionaria no era una urgencia *inminente*. Pero la situación de miseria social de las clases trabajadoras, el rechazo de Frentes Populares como el vigente en Chile entre 1936 y 1941, la conciencia de la situación social y política revolucionaria que se había presentado en Europa como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el temor a la repetición en la próxima posguerra del álgido contexto social argentino de los años 1918-1919 (durante la “Semana trágica” en Buenos Aires y las revueltas en la Patagonia), habían generado en las FF.AA. la voluntad de evitar situaciones semejantes en la próxima posguerra. Un sector militar se había vuelto consciente de la eficacia las “soluciones” que el fascismo había aportado a esa “problemática”. Este fue el caso del coronel Juan Domingo Perón, importante protagonista de la concepción y dirección del golpe de Estado de 1943, quien adquirió esa experiencia personal durante su estadía en Italia, Alemania y España entre 1939 y 1941.

Ahora bien, el régimen surgido del golpe militar no hubiese podido mantenerse mucho tiempo sin un sólido apoyo social. La Unión Cívica Radical (el mayoritario partido de la democracia) y el Partido socialista dieron inicialmente su apoyo al golpe militar con la esperanza de una rápida convocatoria a elecciones sin fraudes, pero quedaron rápidamente desilusionados¹⁴. El Parlamento fue disuelto y todas las autoridades provinciales electas fueron destituidas y remplazadas por delegados del gobierno. El régimen militar decretó la disolución de los partidos políticos. El Partido comunista, violentamente reprimido, se le opuso desde el inicio por estar a favor de la participación argentina en la guerra junto a los Aliados.

Los apoyos iniciales al régimen militar fueron relativamente escasos. Su situación no era muy firme, tanto más cuanto los enfrentamientos internos al Ejército provocaron en poco tiempo la sucesión de tres presidentes “de facto”. Al poco tiempo de hacerse con el poder obtuvo el apoyo de la Iglesia católica y del nacionalismo clerical al implantar la educación religiosa en las escuelas y al intervenir las universidades regidas por el espíritu liberal de la Reforma Universitaria de 1918. También obtuvo el apoyo de las corrientes filo-nazis que se oponían a declarar la guerra a Alemania.

Consiguió además la *simpatía pasiva* de sectores de la clase media baja y de un importante sector del campesinado al decretar la reducción en un 20% de los alquileres urbanos y de los arrendamientos agrícolas, así como la prórroga de los contratos que caducaban en 1944-1945 y la suspensión de todos los juicios de desalojo por vencimiento de los contratos.

¹⁴ Pero el gobierno militar tendrá la aprobación de una corriente del radicalismo (« Forja ») fuertemente nacionalista, industrialista y neutralista, inspirada en la propaganda de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz.

Pero fue un sector del movimiento sindical quien le dará el apoyo que le permitirá consolidarse y emprender la vía del bonapartismo.

7.- En 1943, el sindicalismo argentino estaba dividido en diferentes organizaciones :

1) La CGT n°1, fuertemente anticomunista, preconizaba la independencia de los sindicatos de todo partido político. En ella convivían una tendencia del socialismo, sindicalistas “puros” y ex anarco-sindicalistas. A esta confederación adherían los sindicatos de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, el de tranviarios, textiles, industria del calzado y cerveceros.

2) La CGT n°2, partidaria de la acción político-sindical. Esta confederación estaba dirigida por un sector del socialismo liderado por los dirigentes de los sindicatos de obreros y empleados municipales y de comercio. En ella participaban los comunistas, quienes controlaban los sindicatos de la construcción y de los frigoríficos. A esta Central pertenecían también los sindicatos de los trabajadores gráficos, metalúrgicos y estatales.

3) La pequeña USA (de ideología sindicalista revolucionaria) y la FORA anarquista. Estas dos últimas tenían efectivos muy reducidos.

4) Los sindicatos autónomos.

Inmediatamente después del golpe de Estado, tanto la CGT n°1 como la CGT n°2 (esta última pese a la oposición de los comunistas) ofrecieron colaborar con el gobierno militar. El gobierno impuso la intervención militar de numerosos sindicatos, en particular de los gremios ferroviarios, detuvo a los dirigentes, disolvió a la CGT n°2 y a la principal organización sindical de los obreros de los frigoríficos haciendo encarcelar a sus dirigentes y buscó favorecer a las corrientes “apolíticas” del sindicalismo.

A pesar de ello, en julio de 1943, al percibir la falta de sustento social y la debilidad del gobierno militar, sectores del sindicalismo se acercaron a un sector gubernamental para ofrecerle sus servicios, proponiéndole la creación de una Secretaría de Trabajo (la que será instituida en noviembre de 1943) y la sanción de leyes laborales que retomasen las reivindicaciones históricas del sindicalismo¹⁵. Los interlocutores militares de los dirigentes sindicalistas colaboracionistas fueron el teniente coronel Domingo Mercante y el coronel Juan Domingo Perón.

En una entrevista del 12 de noviembre de 1943 dada al corresponsal del diario *El Mercurio* de Santiago de Chile, Perón explicó el principio de la política laboral de la Secretaría de Trabajo :

“Personalmente yo soy un sindicalista, y como tal, anticomunista, pero creo que el mundo del trabajo debe estar organizado en sindicatos (...) Hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, estando claro que no se tolerará ningún conflicto de orden social (...) nada que

¹⁵ Este fue el caso de dirigentes de La Fraternidad, de la Unión Ferroviaria, de los cerveceros, textiles, telefónicos, de sanidad, y metalúrgicos.

venga a perturbar el trabajo de todos (...) Yo no voy a permitir la acción de elementos subversivos y de agitadores que, en la mayoría de los casos, ni siquiera son argentinos, sino extranjeros que no respetan a nuestro país”.¹⁶

En su primer mensaje radial como Secretario de Estado de Trabajo, Perón afirmó sus principios corporativos :

“La unidad de vista de las tres partes, los patrones, los obreros y el Estado, debe ser la base de la acción para luchar contra los verdaderos enemigos de la sociedad que son los malos políticos, las ideologías extranjeras cualesquiera sean, los falsos profetas que se introducen en los sindicatos para hacer fortuna engañando y traicionando a las masas”.¹⁷

8.- A través de sucesivas crisis en las cúpulas militares, terminó por prevalecer la orientación que aceptó la alianza entre el movimiento obrero laborista - “apolítico” - y el régimen militar que apuntó desde entonces a la institucionalización del movimiento sindical y a su integración en las redes estatales.

Este objetivo había sido realizado por medio de la violencia por el fascismo italiano. Más tarde toda la democracia occidental lo hará suyo y lo impondrá “pacíficamente” luego de la II Guerra Mundial. El gobierno militar lo impuso mediante una combinación de represión de sindicalistas no colaboracionistas, de intervención de sindicatos no adictos y de una audaz política de reformas sociales. El artífice de este intento fue el coronel Perón, quien fue nombrado Vicepresidente “de facto”, Ministro de la Guerra y Secretario del Ministerio de Trabajo y Previsión en el Gobierno de Farrell, constituyéndose así en el “hombre fuerte” del gobierno militar.

En un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 25 de agosto de 1944, Perón explicó a la burguesía empresaria las razones profundas de su política de colaboración de clases, a saber, que *era preferible ceder algo a correr el riesgo de perder todo*.¹⁸

El precio que el gobierno militar tuvo que pagar para acoplar un importante sector del movimiento obrero al proyecto bonapartista en gestación fue la imposición a la burguesía de gran parte de las reivindicaciones laborales del sindicalismo : un régimen de jubilaciones; la creación del Estatuto del Peón rural (que atacaba en los papeles el régimen arbitrario de explotación de los trabajadores agrícolas permanentes, pero que no concernía a los peones de cosecha o transitorios); el reconocimiento del derecho a una representación sindical en las empresas y a vacaciones e indemnización del servicio doméstico. En octubre de 1945 estaban por ser firmados los decretos que instauraban el aguinaldo, las vacaciones pagas, la

¹⁶ Citado en A. Rouquié, *op.cit.*, p. 350.

¹⁷ *Ibidem*, p. 351.

¹⁸ https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=da8289f8-a130-488d-b287-98decb485b3d

indemnización por despido y fallecimiento, el reconocimiento a licencia por enfermedad y un aumento de salarios. En diciembre de 1945 se puso en vigencia el “salario mínimo, vital y móvil”. Entre 1944 y 1945 las organizaciones obreras firmaron más de 700 convenios que regulaban salarios, vacaciones pagas, jornadas y condiciones de trabajo, indemnizaciones por accidentes y despidos. Se instauró además un Fuero Laboral que sacaba a los conflictos laborales de la esfera de la justicia civil.

Cuando las organizaciones sindicales mayoritarias en manos de anarco-sindicalistas, socialistas y comunistas no pudieron ser cooptadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión y la represión no bastaba para ello, aquella promovía la fundación de nuevos sindicatos directamente vinculados a ella. El auge de los sindicatos que apoyaron la política estatal fue inmediato y el número de trabajadores sindicados pasó de 70 mil en 1943 a 500 mil en 1945 y a 1,5 millones en 1947.

La contracara de las concesiones obtenidas fue la aceptación por parte de las dirigencias sindicales adscriptas al proyecto corporativo del decreto de enero de 1945 prohibiendo las huelgas en los servicios públicos y la Ley de Asociaciones Profesionales. Esta ley reconocía a los sindicatos como asociaciones de derecho público, pudiendo el Ministerio de Trabajo adjudicar o retirar personerías gremiales (lo que era un requisito para poder negociar y firmar convenios colectivos de trabajo). Según esta ley, el Estado poseía el derecho de supervisar toda la actividad sindical, reglamentar las huelgas e imponer la conciliación obligatoria. Consagraba además la unicidad sindical por rama de industria y la existencia de una única Central nacional. La ley habilitaba al Ministerio de Trabajo a fiscalizar y anular elecciones, regular las elecciones internas de los sindicatos y establecer que la lista ganadora se quede con todos los puestos directivos. La ley no preveía mecanismos para asegurar la democracia interna de los sindicatos y dejaba librado a sus estatutos la manera de elegir a los representantes, los requisitos y el modo de control del cumplimiento de estos mecanismos. No había en la ley amparo alguno para aquellos trabajadores que quisieran disputar internamente la dirección de un sindicato. La ley les reconocía otros privilegios, que eran conocidos como “monopolio sindical”: manejo de las obras sociales, delegados y tutela sindical - protección contra despidos y suspensiones para delegados y representantes sindicales - y la representación promiscua, es decir que en la negociación con las patronales representasen a todos los trabajadores del oficio o de la actividad, estuviesen o no afiliados. Al recibir un poder absoluto sobre los sindicatos, sus direcciones terminarán burocratizándose, convirtiéndose en firmes *garantes* del Orden burgués y en correas de transmisión de la política estatal. El « modelo sindical » argentino establecido en 1945 ha permanecido prácticamente sin cambios hasta el día de hoy.

9.- La política laborista del gobierno militar generó fuertes resistencias del *conjunto de la burguesía argentina*. La Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, de Industria y de Producción (CACIP), la Bolsa de Comercio y tras ellas 321 entidades empresarias de todo el país se movilizaron activamente contra la política social impulsada por la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Desde marzo de 1945 la movilización política y social contra el gobierno militar fue en un *in crescendo* hasta la crisis de Octubre 1945. De esa movilización, alentada por la Embajada de los EE.UU. y en la cual el embajador Spruille Braden intervino pública y activamente, participaron todos los partidos burgueses (la UCR, el Partido Demócrata Progresista, el Partido conservador), las organizaciones patronales arriba mencionadas, los sindicatos aún no cooptados por la política de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los partidos socialista y comunista y la Federación Universitaria Argentina. El gobierno cedió a la presión opositora y volvió a legalizar a los partidos políticos el 31 de mayo. En agosto de 1945, tras levantar el Estado de sitio, anunció la convocación a elecciones.

El 19 de septiembre el conjunto de las principales fuerzas sociales y políticas opositoras realizaron en Buenos Aires una manifestación multitudinaria por “la Constitución y la Libertad” con más de 200.000 participantes que reclamaban el fin del gobierno militar, el traspaso del poder a la Suprema Corte de Justicia (que estaba en manos de abogados de la oligarquía) y la rápida convocatoria a elecciones.

La participación de los partidos socialista y comunista junto a los representantes de toda la oligarquía y de la democracia burguesa fue a los ojos de las masas obreras el anuncio de un inexorable e histórico *suicidio político*.

La movilización opositora provocó una fractura en las altas esferas del Ejército. El 9 de Octubre un sector con mando de tropa – a las órdenes del comandante de Campo de Mayo, quien fue nombrado inmediatamente después ministro de la Guerra – exigió la destitución del coronel Perón de sus tres cargos gubernamentales y, más tarde, su detención en la Isla Martín García.

Simultáneamente, el frente único de la oposición agrupada bajo la sigla de “Junta de Coordinación Democrática” - que reunía a radicales, conservadores, socialistas y comunistas - publicó un comunicado reclamando la capitulación sin condiciones del gobierno militar, su renuncia y la transferencia del gobierno a la Corte Suprema de Justicia.

Privado de respaldo militar, Perón renunció sin llamar a los trabajadores a movilizarse en su apoyo. Su objetivo había sido dar una base pluriclasista a la dictadura militar y al proyecto industrialista. Después de dos años en el poder, los sucesivos gobiernos militares sólo habían conseguido el apoyo social muy reducido de sectores de la derecha católica, de grupos nacionalistas fascistas, de desprendimientos muy minoritarios del radicalismo y la adhesión de importantes sectores sindicales colaboracionistas. Al no haber logrado la participación de sectores significativos de la burguesía y al perder el sostén militar que era la columna vertebral de su proyecto, éste se derrumbaba sin futuro.

Al volver a legalizar los partidos políticos y al fijar elecciones, los militares habían cedido ante la movilización de la oposición unificada. Ésta englobaba a todas las ramificaciones de la oligarquía, a todos los partidos de la democracia burguesa, al imperialismo americano y a tendencias y organizaciones del movimiento obrero. El partido militar no había aún generado una representación política capaz de representar al programa nacionalista, industrializador y de resistencia al imperialismo yankee en condiciones de pelear el poder a través de elecciones.

La destitución de Perón significaba, al mismo tiempo, la pérdida del apoyo al régimen militar del importante sector sindical cooptado por la Secretaría de Trabajo y Previsión. En esas condiciones, el gobierno militar hubiese quedado extremadamente debilitado y sin perspectivas políticas. Con el propósito de no perder el apoyo de los sindicatos colaboracionistas, el 15 de octubre el presidente Farrell y el flamante ministro de la Guerra aseguraron a la CGT unificada que “las conquistas sociales (ya en vigencia) serían respetadas”.

Las masas trabajadoras sabían por experiencia que las promesas gubernamentales sólo comprometen a quienes las escuchan. En consecuencia, algunos sindicatos y multitudes de obreros decidieron salir espontáneamente el 17 de Octubre a la calle, exigir la liberación de Perón y trastocar las relaciones de fuerzas en el seno de la institución militar a favor de la dupla Farrell-Perón.

Frente a la movilización de importantes masas trabajadoras del Gran Buenos Aires¹⁹, el nuevo ministro de la Guerra y hombre fuerte del gobierno se opuso a la propuesta del ministro de la Marina (representante de lo más rancio de la reacción oligárquica) que preconizaba la represión abierta para impedir la llegada a la capital de los obreros de los suburbios industriales. Semejante desenlace no solamente hubiese provocado una radicalización del movimiento obrero, sino que también hubiera llevado rápidamente a la renuncia del gobierno militar a favor de la ultra reaccionaria Corte Suprema de Justicia y la entrega del poder a “los civiles” cuyas políticas habían justificado, a ojos de la oficialidad del Ejército, tanto el golpe de Estado de 1930 contra el radical Yrigoyen como la de junio de 1943 contra los protagonistas conservadores de la “década infame”.

Sin estrategia política propia, a los golpistas de última hora no les quedaba otra alternativa que capitular, liberar a Perón, aceptar sus condiciones y hacer que las próximas elecciones dirimieran el enfrentamiento de las fuerzas políticas en presencia.

Toda la oposición al gobierno militar estaba convencida de que el resultado de la contienda electoral - que finalmente tendrá lugar en febrero de 1946 - sería contrario a la política social llevada a cabo en los dos años precedentes. Cuatro meses después, su desilusión será total.

10.- Para participar en las elecciones previstas con fuerza política propia, aproximadamente 50 sindicatos fundaron en octubre de ese año el Partido Laborista, con el dirigente telefónico Luis Gay (un ex sindicalista revolucionario) como presidente y Cipriano Reyes, dirigente de los trabajadores de los frigoríficos, como vicepresidente.

¹⁹ Las versiones peronistas hablan de aproximadamente medio millón de trabajadores que invadieron pacíficamente las avenidas de Buenos Aires. [J. Godio, Julio Godio, “Historia del movimiento obrero argentino”, ed. Corregidor, 2000, pp. 828-829 y D. Rubinzal, *op.cit.*, pp. 205-206]. A. Rouquié habla de varias decenas de miles de manifestantes y califica a las versiones peronistas de “leyenda”.

El Partido Laborista aspiraba a ser un típico partido tradeunionista a imagen y semejanza del Partido Laborista inglés. Su objetivo era crear una expresión política directa de las estructuras sindicales para influenciar la política estatal a través de sus representaciones parlamentarias. Para garantizar su independencia, excluyó toda financiación por parte de cualquier gobierno o empresa.

En su Programa electoral, el Partido Laborista se presentó como un partido obrero con un programa burgués (que hoy sería llamado “progresista”) y antirrevolucionario²⁰.

Los dirigentes de este partido apoyaron la candidatura presidencial de Perón pensando instalar en el vértice del Estado al “mejor” representante de los intereses del sindicalismo y de los trabajadores asalariados. El despertar de sus dirigentes de esta ilusión será terriblemente violento por no haber sido conscientes de que lo que Perón - y con él el bonapartismo peronista - pretendía de los dirigentes sindicales era que se transformaran en correas de transmisión de la política estatal en el seno de las masas.

11.- Las grandes maniobras electorales se iniciaron inmediatamente después del 17 de Octubre con la conformación de dos bloques violentamente antagonistas. Por una parte, la Unión Democrática, compuesta por la UCR, el Partido socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido comunista y el Partido Popular Católico con el apoyo de la Federación Universitaria Argentina, las organizaciones patronales (UIA, Sociedad Rural, Cámara Argentina de Comercio, etc.), las organizaciones profesionales (Centro de Ingenieros, Asociación de

²⁰ * En el terreno político reivindicó la “democracia política integral” (es decir, el régimen parlamentario sin fraudes), la “extensión de los derechos políticos para la mujer” y una nebulosa y hueca “democracia económica”; repudió “todas las doctrinas contrarias a nuestro espíritu Nacional” (léase : socialismo y comunismo) y abogó por “la paz interior” (léase : “contra la lucha de clases). * En el ámbito económico avanzó los objetivos de la nacionalización de los servicios públicos y de la minería; diversas medidas que favorecieran al desarrollo del capitalismo nacional en general y de la industria en particular; la capacitación técnica de la clase obrera; una reforma agraria con la eliminación del latifundio. * Refiriéndose a la legislación laboral reclamó la participación de los sindicatos en todas las instituciones en que estuviesen representados otros sectores de la producción (léase las patronales); la generalización del régimen jubilatorio a las profesiones liberales; la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas; el establecimiento de un salario mínimo obligatorio en todo el país; las convenciones colectivas de trabajo; y pretendió que la solución para la desocupación en régimen capitalista sería la reducción de la jornada de trabajo sin rebaja de salarios. * En relación con la política fiscal postuló la imposición sobre las tierras no cultivadas o explotadas y la eliminación progresiva de los impuestos que gravasen los productos de primera necesidad. Su Programa terminaba requiriendo el desarrollo estatal de los servicios médicos. [J. Godio, *op.cit.*, pp. 832-834]

Abogados, Sociedad Argentina de escritores, etc.). La Unión Democrática llevó como candidatos a Presidente y Vicepresidente a dos figuras del Partido Radical.

El frente que postuló a Perón como presidente estaba conformado por el Partido Laborista, por un desprendimiento muy minoritario del radicalismo (UCR Junta Renovadora²¹) y del Partido Independiente²² - estos dos últimos sin bases sociales significativas, compuestos mayormente por elementos esperanzados en cosechar puestos estatales y gubernamentales. Este frente recibió la “bendición” de la Iglesia Católica.

Con el apoyo público del Departamento de Estado de los EE.UU., la Unión Democrática hizo campaña en nombre de la “democracia contra el nazi-fascismo”. La campaña a favor de la fórmula Perón-Quijano fue hecha en nombre de “la justicia social” contra la oligarquía y el imperialismo, planteando la alternativa “Braden o Perón”.

La victoria de Perón fue por 1.478.372 votos (54% del electorado) contra 1.211.660 a la Unión Democrática. Todos los gobiernos provinciales (menos uno, de importancia secundaria) y las mayorías en las Cámara de Diputados y en el Senado quedaron en manos del frente peronista. Quienes les dieron la victoria fueron las masas obreras urbanas y rurales y los migrantes del campo a la ciudad, mientras que por la Unión Democrática votaron los empresarios, los patrones, las clases medias, los profesionales y los empleados de “cuello blanco”²³. Fue el Partido Laborista quien aportó la aplastante mayoría de los votos a Perón.

Con todos los resortes del poder en las manos, las condiciones estaban dadas para la instauración de un régimen apoyado en el trípode : Ejército, clase obrera (encuadrada en estructuras político-sindicales integradas en las redes estatales) y burguesía industrial (una burguesía en expansión resultante del industrialismo promovido activamente por el Estado). El poder bonapartista del régimen peronista buscará mantener un equilibrio permanente entre estos tres pilares, y se derrumbará nueve años más tarde cuando hayan desaparecido las condiciones subyacentes.

²¹ En el que estaban agrupados “notables” locales expulsados del radicalismo por haber colaborado con el régimen militar. [<http://cdsa.academica.org/000-019/371.pdf>]

²² Con la participación de militares, así como de miembros minoritarios pertenecientes a la corriente conservadora.

²³ Gino Germani, “El surgimiento del peronismo : el rol de los obreros y de los migrantes internos”, en Mora y Araujo y Llorente (comp.), “El voto peronista. Ensayos de sociología electoral argentina”, Sudamericana, 1980, p. 102. Citado en J. Godio, *op.cit.*, p. 844.

LOS GOBIERNOS PERONISTAS (1946-1955)

El bonapartismo del régimen peronista

12.- El laborismo argentino pretendía hacer del gobierno peronista y de las instituciones parlamentarias sus representantes políticos en el Estado. Ese no era el proyecto bonapartista de Perón, quien se veía a sí mismo a la cabeza de un frente interclasista cuyo norte era la modernización del capitalismo argentino.

El proyecto peronista apuntaba a hacer de las organizaciones obreras instrumentos de control del proletariado, y por ello mismo la existencia de un Partido Laborista y de una CGT independientes del Estado eran para él inaceptables. Las fuertes reticencias iniciales del laborismo a integrarse en un partido policlasista terminaron por ceder ante la presión estatal y, tras la disolución del Partido Laborista, en enero de 1947 se fundó el Partido Peronista. Paralelamente, Perón condujo una exitosa ofensiva difamatoria y represiva en contra de la dirección de la CGT para ubicar en sus cargos a dirigentes totalmente dispuestos a acatar la verticalidad bonapartista.

La viabilidad de ese proyecto suponía la adhesión de las masas obreras. Ello se consiguió con creces gracias a la aprobación de legislaciones sociales que pusieron a Argentina al nivel de los países europeos de la inmediata posguerra: régimen de jubilaciones²⁴, preaviso e indemnizaciones por despido, vacaciones pagas, disposiciones sobre horarios de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, el aguinaldo (13° sueldo anual). Sin embargo, todo ello “no cayó del cielo” ni resultó de prebendas gubernamentales, sino que fue el resultado de las grandes movilizaciones de las masas obreras en el período 1946-1948. Según M. Rapoport,

“[Las] nuevas conquistas fueron, fundamentalmente, producto de los conflictos laborales que entre 1946 y 1948 involucraron a grandes contingentes de la clase obrera. En este activismo de los trabajadoras tuvieron un papel relevante los dirigentes sindicales. (...) Durante este período los sindicatos estaban más capacitados para organizar a la mayoría

²⁴ Que de 300.000 afiliados en 1944 pasaron a cubrir 3.500.000 en 1949. En 1948, se estableció un fondo especial para pensionar a toda persona de escasos recursos, mayor de 60 años, no amparada por ningún régimen de jubilación.

Los fondos del régimen de jubilaciones sirvieron, en particular, para financiar el déficit fiscal del Estado. Esa financiación representó el 49% de las cotizaciones en 1949 y el 77% en 1955, siendo “retribuida” con una tasa del 4% anual cuando la inflación superaba el 20%. Desde sus inicios la descapitalización de los fondos de jubilación (pertenecientes por definición a la clase trabajadora) a favor de las necesidades del Estado y de la clase burguesa ha sido constante a lo largo del tiempo, lo que explica los niveles crónicos de indigencia de las jubilaciones de las masas trabajadoras del país.

de los trabajadores, y las asambleas sindicales alcanzaron una dinámica participación en las decisiones de los gremios”²⁵.

Fue gracias a esas movilizaciones que el índice de salarios reales pegó un salto del 66,7% entre 1945 y 1948. Ese salto favoreció principalmente a los trabajadores manuales con mayor capacidad de organización y movilización.

La mejoría de las condiciones de vida de las masas trabajadoras urbanas fue acompañada de políticas estatales de subsidios a los alimentos y a las tarifas de los servicios públicos, del congelamiento de los alquileres urbanos, amén de políticas de asistencia social²⁶.

Desde un inicio, paralelamente a la voluntad de organizar, extender y centralizar al movimiento sindical, el objetivo prioritario del gobierno de Perón fue “disciplinarlo”. La adhesión de las masas trabajadoras al gobierno peronista facilitó el creciente “verticalismo”, es decir, el control político-estatal de sus organizaciones gremiales que estaban en pleno desarrollo²⁷. Tras el Congreso Extraordinario de la CGT de octubre de 1947 *“se dio un proceso de centralización sindical que era no sólo organizativo, sino, ante todo, político. Por eso, desde la CGT se comienza a intervenir sindicatos opositores (...) La potenciación de la CGT tenía un objetivo político preciso : garantizar la adhesión política de los trabajadores al gobierno peronista. (...) En líneas generales, la CGT trató de disminuir las huelgas. Dentro de esta táctica, muchas huelgas fueron calificadas por la CGT como “huelgas políticas” antigubernamentales y el sindicalismo peronista aportó al aislamiento y la derrota de los huelguistas”²⁸. (Los subrayados son nuestros, ndr.)*

²⁵ M. Rapoport, op.cit., p. 364. Según J. Godio (op.cit., p. 896), “entre 1945-1950, el marco político de apertura al accionar del movimiento sindical y el cúmulo de reivindicaciones insatisfechas, determinan una importante cantidad de huelgas: 422 casos con 1.232.833 huelguistas y 11.724.944 jornadas perdidas”.

²⁶ Uno de los canales más importantes de la asistencia social suministrada por el régimen peronista fue paraestatal y estuvo instrumentada a través de la Fundación Eva Perón fundada en 1948. Todo ello permitió generar y alimentar una idolatría popular hacia “Evita”.

²⁷ El número de afiliados a la CGT pasó de 528.523 en 1945 a 877.333 en 1946, a 1.532.925 en 1948 y a 1.992.404 en 1950.

²⁸ J. Godio, op.cit., pp. 893 y 896. En realidad, el sindicalismo peronista no pudo impedir “la resistencia gremial pura, que agrupó a sindicatos que no eran laboristas ni socialistas ni peronistas, pero que pretendieron conservar su autonomía en las negociaciones colectivas y se resistían a ser correa de transmisión de las directivas políticas. Este tipo de sindicalismo fue sofocado pero subsistió como fuerza potencial durante todo el régimen peronista (vg. La Fraternidad)”; ni tampoco pudo eliminar “la resistencia peronista independiente que agrupó a núcleos sindicalistas que apoyaban al gobierno peronista pero que conservaban la autonomía sindical y encabezaron huelgas desautorizadas por la CGT (vg. sectores sindicales de la Federación de la Carne, Unión Ferroviaria, Asociación Bancaria y Federación Gráfica). En

Esta política de represión de la lucha de clases en general - y de obreros y obreras en particular (con detenciones, torturas y asesinatos^{29/30}) - se acompañó de la intervención de los sindicatos que no respondían directamente a las políticas del Estado³¹ y culminará con *el no reconocimiento del derecho de huelga en la nueva Constitución de 1949*.

El no reconocimiento del derecho huelga respondía a la ideología peronista de la llamada “Tercera posición” (que proclamaba demagógicamente estar tan alejada del capitalismo como del comunismo) y de la proclamada “Comunidad organizada” que pretendía - en nombre de una no precisada “justicia social” y de la “Doctrina Social de la Iglesia” - compatibilizar, gracias a la acción del Estado, los intereses de las distintas clases sociales en aras de los supremos intereses de la Nación (léase del capitalismo nacional)³². En esta visión, las organizaciones

1954 este último tipo de sindicalismo se instaló también en la Unión Obrera Metalúrgica. El sindicalismo peronista independiente fue mediatizado por la CGT y no pudo transformarse en hegemónico, pero subsistió como comportamiento político sindical contestatario durante todo el régimen peronista”. [Ibidem, pp. 917-918]

²⁹ Sobre represión de la huelga y de los trabajadores azucareros y de las trabajadoras telefónicas de 1949, cf. Esteban Piliponsky, “La gran huelga azucarera de 1949 y la autonomía sindical. El consenso acerca de la represión y la coerción” [<http://www.cehti.com.ar/sites/default/files/inline-files/Piliponsky.pdf>] y Marina Kabat, “Gobiernos, sindicatos y clase obrera bajo el peronismo clásico” [<http://cdsa.academica.org/000-023/391.pdf>]

³⁰ En 1947, bajo el gobierno peronista, tuvo lugar la llamada Masacre de Rincón Bomba de la población indígena Pilagá en el Chaco, quien estaba forzada a trabajar en condiciones serviles. Ese asesinato colectivo (con centenares de muertos y desaparecidos) fue obra de la Gendarmería Nacional, estuvo avalada por el Poder Ejecutivo y fue ignorada por todos los gobiernos sucesivos hasta el día de hoy. [Cf. la entrevista y el documental de Valeria Mapelman : <https://razonyrevolucion.org/charla-debate-sobre-el-documental-octubre-pilaga-memorias-y-archivos-de-la-masacre-de-rincon-bomba-de-valeria-mapelman/> y <https://www.youtube.com/watch?v=ZWV-8P4MA00>]

³¹ “A mediados de 1946 es intervenida la Unión Obrera Metalúrgica; en enero de 1947, la Federación de los Telefónicos; luego la Federación Bancaria, después la Federación Gráfica Bonaerense, más tarde la FOTIA, la Unión Ferroviaria... Uno de los focos de mayor resistencia contra la completa estatización — doblemente significativo por tratarse de un foco intensamente peronista— es la Federación Obrera de la Carne, caracterizada por una actitud militante contra la patronal. En 1950, la CGT trata de dividirla formando una «Junta Antisindical de la Carne», que no logra afiliados. En consecuencia, la CGT interviene a la Federación de la Carne... pese a que la Federación no está afiliada a la CGT” [Milciades Peña, “Historia del pueblo argentino”, ed. Emecé, 2012, pp. 510-511]. También fueron intervenidos los sindicatos de los trabajadores textiles, estibadores, panaderos, azucareros, del cuero y marítimos [Doyon, Louise, “Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955”, Buenos Aires, siglo XXI, 2006, pp. 312-313].

³² “Queremos que el capital y el trabajo en estrecho abrazo labren la grandeza de la Patria, mientras el Estado vela por el bien de unos y de otros, asegurando la justicia para el rico y para

sindicales obreras debían simultáneamente ser las correas de transmisión de la política del Estado en el seno de las masas proletarias y ser portavoces de sus necesidades en los órganos decisionales del Estado.

La ideología del “justicialismo” postulaba una sociedad organizada sobre bases corporativas y correspondía al Estado – dirigido por el Partido Peronista en cuya cabeza Perón, el “Conductor” y el “Primer Trabajador” (sic), era el “verdadero intérprete de la justicia social” – la función de armonizar la sumisión de los reclamos de los trabajadores a las exigencias supremas de la “Nación”. Fue “naturalmente” que 1950 la CGT – pilar fundamental del bonapartismo peronista - será integrada en el Partido Peronista como la rama sindicalista del “movimiento justicialista”. El Partido Peronista se presentaba como un “movimiento nacional”, expresión integradora y de compatibilización de las necesidades y aspiraciones de las diferentes clases y sectores sociales. En función de esa visión creó, junto a la CGT, su propia rama política femenina en 1949, la Confederación General Económica con un sector del empresariado en 1952, la Unión de Estudiantes Secundarios en 1953 y la Confederación General Universitaria de estudiantes en 1950.

13.- Otra “pata” del trípode bonapartista debía ser la burguesía industrial argentina. El problema con ella era que la gran burguesía industrial organizada en la UIA se había alineado con la Unión Democrática y era totalmente opuesta a la política social del gobierno peronista, por lo cual fue intervenida en 1946.

Haciendo abstracción de esa oposición, la política industrialista del peronismo apuntó a la creación de algunas grandes empresas estatales y de capitales mixtos³³ y a la extensión del entramado de pequeñas y medianas empresas gracias a la política de créditos a la industria. Para ello nacionalizó el Banco Central y creó el Banco Industrial. Fue así cómo los equipos industriales aumentaron como porcentaje del total de las importaciones, del 13,3% en 1945 al 47,4% en 1948. Esa política se acompañó de obras públicas de infraestructura, como la construcción de gasoductos y refinerías, diques, centrales hidroeléctricas y usinas térmicas.

el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que obedece”. “Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por un acuerdo justo entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emane del Estado”. [Discurso de Perón del 4-10-1946, en Mario J. Lattuada, “La política agraria peronista (1943-1983)/1, Centro Editor de América Latina, 1986, p. 74]

³³ SOMISA (acería), ATANOR (agroquímicos), DINIE (Dirección Nacional de Industrias del Estado) conformada por empresas alemanas expropiadas durante la guerra. Más tarde creará Aerolíneas Argentinas y desarrollará la flota mercante. En 1954, las empresas públicas representaban 9,5% de la producción industrial y empleaban 12% de la mano de su mano de obra. [D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 219]

La política del Estado hizo que el porcentaje de trabajadores empleados en la industria se elevó de un 21,3% de 1945 a 28,3% en 1949, para caer al 25,1% en 1952 (como consecuencia de las dificultades económicas encontradas a partir de 1949). El número de establecimientos industriales pasó de 84.440 en 1947 a 148.325 en 1951 (pero el promedio de empleados por empresa cayó de 12.1 a 7.9, lo que indica un fuerte desarrollo de las empresas industriales muy pequeñas). Paralelamente, la participación de los trabajadores en la agricultura cayó de un 34% de la población activa en 1945 a un 25% en 1952.

Si bien el régimen peronista no pudo valerse de un apoyo entusiasta de la burguesía industrial equiparable a la de la clase obrera y a sectores populares de la población, sí pudo contar con la neutralidad complaciente de un sector de ella favorecida con la ampliación del mercado interno, con tasas de cambio muy favorables y créditos bancarios con tasas negativas.

Recién en 1952 el peronismo pudo institucionalizar el apoyo de un sector de la burguesía industrial con la creación de la Confederación General Económica que incluía a 600.000 pequeñas y medianas empresas organizadas en 24 Federaciones.

Pero la política industrialista del gobierno peronista, si bien acompañó e impulsó la tendencia a la sustitución de importaciones de productos de la industria liviana, no logró modificar significativamente la estructura productiva carente de una fuerte industria pesada y de una vasta producción de insumos industriales.

14.- El tercer pilar del bonapartismo peronista fue inicialmente el Ejército argentino. El régimen peronista contó desde el inicio no sólo con el apoyo de la sub-oficialidad de las tres armas pertenecientes tanto a sectores “populares” urbanos como cercanos al campesinado, sino también con el sostén de gran parte de la oficialidad del Ejército (pero no con el de la Armada - la marina militar - históricamente ligada a los sectores sociales oligárquicos). Según Alain Rouquié,

"A los ojos de los oficiales del Ejército, y sin importar sus reticencias o preconcepciones, Perón encarna el proyecto político de junio de 1943. Es el presidente de las fuerzas armadas. (...) El lugar del Ejército en el nuevo régimen no se reduce a la complacencia corporativa (...) Perón trata de satisfacer las necesidades institucionales de los militares. El régimen peronista es una época de expansión y modernización de las fuerzas armadas argentinas. (...) Entre 1945 y 1948 (...) la inversión del Estado en la defensa nacional alcanzó el 50,7% del total de las inversiones no directamente productivas del Estado. (...) En 1952, siete años después del final del conflicto (mundial), el Ejército tenía por sí solo cerca de 80.000 soldados y 5.520 oficiales. Esto está muy lejos del pequeño ejército de paz que, en 1931, incorporó 27.715 reclutas y contó con 1.935 oficiales. (...) En 1955, el Ejército argentino, con 90 generales (frente a 37 en 1943), tenía una estructura muy densa que ofrecía (...) grandes oportunidades de ascenso a los oficiales. (...) El personal del gobierno incluye una alta proporción de militares retirados o de oficiales en servicio activo (...) Nunca antes un gobierno

constitucional había incluido tal participación de funcionarios del Ejército. Si se consideran únicamente los cargos más altos (ministros y gobernadores de las tres provincias principales), las cifras entre 1946 y 1951 oscilan entre el 25 y el 34%. En 1951, de 21 ministros o secretarios de Estado, había 6 militares; de 24 gobernadores de provincias o territorios nacionales, había 8 oficiales. (...) Las fuerzas armadas y su sector industrial han recibido gran parte de la responsabilidad en el ámbito de la infraestructura industrial (productos químicos pesados, hierro y acero) y los sectores de tecnología avanzada (ingeniería mecánica). Las plantas establecidas entre 1946 y 1955 como parte de la Dirección General de Fabricas Militares producen en gran medida para las necesidades civiles. (...) No se puede negar la contribución de los militares a las industrias de "alta tecnología" (...) Bajo su régimen, las fuerzas armadas proporcionaron al país una industria aeronáutica y una industria de fabricación de automóviles con un futuro brillante".³⁴

15.- M. Rapoport sintetizó el papel cumplido por el régimen bonapartista del gobierno de Perón:

“El Estado justicialista surgió para solucionar la crisis de la hegemonía oligárquica. Debió solventar el vacío de poder generado por la incapacidad de los grupos tradicionales – ligados al modelo agroexportador – para imponer sus intereses como proyecto para toda la sociedad y la de los grupos emergentes que sin representación política y en posición subordinada carecían de fuerza para presentar los suyos. Para ello, el nuevo Estado asentó su estrategia en la movilización política y social de los trabajadores incorporándolos al sistema político, ampliando su participación e integrándolos a nuevas formas de consumo.

“El Estado amplió su autonomía relativa respecto a las clases y grupos sociales. No sólo medió en las relaciones entre los trabajadores y las organizaciones patronales, legitimando, en ocasiones, reivindicaciones laborales o conteniéndolas, aunque debiera pasar por encima de los sindicatos o imponer a éstos soluciones no queridas. También asumió una función reguladoras de las necesidades de los sectores empresarios. La concepción y el accionar del gobierno justicialista contrastaba con lo de sus predecesores que expresaban con su desempeño un tipo de Estado cautivo de las clases dominantes tradicionales.

“Ensanchó, asimismo, el espacio para el desarrollo industrial y para la emergencia de nuevos sectores medianos y pequeños, del empresariado fabril. (...) [El] Estado y sus organismos se transformaron en intérpretes de sectores sociales antagónicos, arbitrando sus conflictos y conduciendo un proceso de industrialización en lugar de los mismos empresarios y del mercado”.³⁵

³⁴ Alain Rouquié, *op.cit.*, pp. 386-394.

³⁵ M. Rapoport, *op.cit.*, pp. 369-370.

16.- En el plano político-institucional, la oposición liberal acusó al régimen peronista de nazi-fascismo. Su caracterización resultaba de la ideología peronista de una sociedad en que las clases sociales, organizadas en corporaciones (CGT, CGE, ...) veían sus intereses armonizados por el Estado en aras de lo “supremos intereses de la Nación”. El ejercicio de la violencia represiva por parte del gobierno peronista hacia sus opositores, tanto políticos como sindicales, venía a abonar la acusación de totalitarismo. La integración reivindicada y pública de los sindicatos y de la CGT en las redes estatales venía a acreditar las prácticas propias del fascismo italiano. El carácter acentuado de cesarismo y el culto de masas hacia la figura del “Conductor” (léase Perón) y de su esposa, Eva Duarte (Evita), nominada oficialmente “Jefa Espiritual de la Nación” por el Congreso Nacional, recordaban exteriormente la liturgia de masas del fascismo italiano.

Si bien Perón podía tener simpatías ideológicas por el régimen fascista, haber extraído provecho de su estadía en Italia, Alemania y España para la maduración de su propio proyecto político y hacer suyos elementos de su ideología, existen importantes diferencias de naturaleza entre el fascismo italiano y el peronismo.

En primer lugar, porque el régimen fascista representó la victoria de la contrarrevolución burguesa. El partido fascista unificó políticamente *al conjunto de la burguesía italiana, a la pequeña burguesía y a los desclasados por la crisis de la posguerra* contra el peligro real de una revolución proletaria. Por su parte, el conjunto de la clase obrera se enfrentó contra el fascismo. En Argentina, no existió ningún peligro revolucionario. El peronismo tuvo el apoyo masivo de las masas obreras, no representó un partido único de la burguesía nacional y gran parte de la pequeña burguesía fue antiperonista. Además, los regímenes fascistas europeos liquidaron a las democracias burguesas respectivas, mientras que el régimen peronista no lo intentó (bien que hizo de ella una democracia con muy limitadas libertades públicas).

Por otra parte, la integración de las organizaciones sindicales en las redes estatales ha sido lograda no sólo por el fascismo, sino también - luego de la segunda guerra mundial - por las democracias burguesas occidentales, e incluso ocurrió en Alemania inmediatamente después de la primera guerra mundial. El hecho de que las democracias occidentales lo hayan conseguido “por las buenas”, mientras que el peronismo lo hizo recurriendo tanto a la cooptación voluntaria de sus dirigentes como a la violencia, el resultado ha sido el mismo, aunque en la Argentina asumió ribetes caricaturales en las relaciones entre el movimiento sindical y el “Conductor” (alias “Primer Trabajador”).³⁶

³⁶ Si hubiera que encontrar un paralelo histórico para los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955), no es con el fascismo italiano que habría que hacerlo, sino con la ideología y la política del movimiento nacionalista - apoyado por el sindicalismo revolucionario italiano - de Gabrielle D’Annunzio en ocasión de la “Epopéya de Fiume”. Cf. Carlos N. Svidler, “Revolución y contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923)”, capítulo VI, §9, publicado en este blog.

17.- El gobierno peronista encaró la modernización de otros aspectos de la sociedad argentina:

- En 1943, 400.000 familias vivían en alojamientos donde cuatro o más personas ocupaban una sola habitación, y 800.000 otras de dos o más personas viviendo en una habitación. Todavía en 1947, el déficit de viviendas estaba estimado en 650.000 unidades. Con su política de créditos hipotecarios, el gobierno peronista dio la posibilidad de construir 300.000. Pero ello no impidió el desarrollo de las villas miserias.
- Entre 1946 y 1951, el número de las camas hospitalarias se elevaron de 66.300 a 114.000. Se logró la erradicación del paludismo. Y los sindicatos crearon sus propios sistemas de salud.
- Con la creación entre 1947 y 1951 de 8.000 escuelas, liceos técnicos y la Universidad Obrera (más tarde llamada Tecnológica), entre 1945 y 1955 la matrícula primaria aumentó un 34%, la secundaria un 134% y la técnica un 220%. Los aranceles universitarios fueron eliminados. Todo ello fue acompañado de una férrea regimentación ideológica, lo que conllevó, en particular, la destitución en 1946 de 1.500 profesores universitarios.
- En septiembre de 1947 fue sancionada la ley del sufragio universal que incluía el derecho de voto de las mujeres.

Además, el gobierno nacionalizó la distribución de gas, las compañías telefónicas y los ferrocarriles. La nacionalización de los ferrocarriles (que conllevó la de un cierto número de puertos) por un monto de 150 millones de libras esterlinas fue la de una empresa descapitalizada por la política de falta de inversiones desde la primera posguerra : de las 3.965 locomotoras en funcionamiento en 1947, más de la mitad eran obsoletas y habían sido puestas en funcionamiento antes de 1910; y en 1954, sobre un total de 4.300 locomotoras (de las cuales sólo 226 tenían motores diésel) 2.680 tenían más de 35 años, 27.6% estaban prácticamente fuera de servicio y sólo 220 tenían menos de 10 años). Por el contrario, los ingleses hicieron un excelente negocio con esta venta cuyo precio fue levemente inferior a su cotización en la Bolsa de Londres. Ya en 1940 los ingleses habían expresado el deseo de sacárselos de encima. La urgencia de los ingleses por vender era tanto mayor cuanto que entre 1929 y 1936 su valor había caído un 88% y que a partir de 1947 caducaba la ley de 1907 que eximía por 40 años a la empresa del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales a cambio de un gravamen único más favorable. Además, para los ingleses los ferrocarriles habían perdido su interés en abaratar los costos del transporte de las mercaderías importadas de Inglaterra ya que, después de la guerra, no estaban en condiciones de aprovisionar al mercado argentino³⁷.

³⁷ Rapoport, *op.cit.*, pp. 388 y 391-393; D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 238; A. Rouquié, *op.cit.*, p. 412.

18.- Coincidiendo con los primeros años de la posguerra, los tres primeros años del gobierno peronista fueron muy favorables a la economía argentina. Entre 1946 y 1948 el PIB aumentó en un 27,6%. Ello resultó del incremento de las inversiones, del aumento de la demanda interna y de la política estatal que apuntó a la modernización de las infraestructuras del país.

En ese período, las inversiones crecieron en un 58,7% como resultado de la disponibilidad de divisas acumuladas durante la guerra y de los buenos precios internacionales de los productos agropecuarios. Ello permitió financiar la importación de maquinarias e insumos industriales para el sector de la industrial liviana que estaba totalmente descapitalizado y obsoleto por la falta de importaciones de bienes de producción durante el conflicto bélico. A su vez, el incremento de la capacidad adquisitiva de la población hizo que el aparato industrial funcionase a pleno régimen.

Pero a partir de 1949 la economía argentina entró en una etapa de recesión y de estancamiento como resultado de una dinámica económica sistémica que la caracterizará desde entonces. El PIB cayó un 1,3% en 1949, subió 1,2% en 1950, 3,1% en 1951 para derrumbarse 6,6% en 1952 y subir 5,4% en 1953. Así, pues, entre 1948 y 1953, el PIB sólo creció un 1,4%.

La industria argentina, fundamentalmente orientada a la industria liviana, dependía de la importación de bienes de producción (hasta el punto que en aquellos años debía importar hasta combustible)³⁸. Su baja productividad en comparación con los estándares internacionales hacía que la gran mayoría de los productos industriales argentinos no eran internacionalmente competitivos³⁹. Pero ya a partir de 1948 el país había invertido la totalidad de las reservas en divisas acumuladas durante la guerra como resultado de la compra de las empresas de servicios públicos en manos de capitales extranjeros y de los empréstitos argentinos en el exterior. Y la estafa perpetrada por el Estado inglés fue una traba mayúscula a la importación de bienes de producción⁴⁰.

³⁸ En 1955, la Argentina debía importar 90% del carbón y el 46% del petróleo que consumía. Entre 1950 y 1955, el porcentaje representado por el rubro “Combustibles” en el total de las importaciones era del 14,5%, superior al porcentaje correspondiente a “Maquinaria industrial” (11,1%). [Rapoport, *op.cit.*, p. 417]

³⁹ A modo de ejemplo, “el tamaño promedio de un establecimiento fabricante de metales básicos en los EE.UU. era 35 veces más grande que el existente en Argentina (medido en potencia instalada) en 1954”. [D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 224]

⁴⁰ La estafa perpetrada por el gobierno inglés en detrimento del gobierno argentino consistió, en un primer momento, en no permitir el desbloqueo de la suma (en ese momento colosal) de 125 millones de libras esterlinas (garantizadas en oro) que Inglaterra debía como saldo de las importaciones agropecuarias de 1939 a 1945. Durante todo ese período, el Estado argentino había tomado a su cargo el pago de la mercadería a los productores y a los frigoríficos locales.

La posibilidad de adquirir en el exterior los medios de producción requeridos por la industria dependía pues de la disponibilidad de divisas resultantes de la exportación de su producción agropecuaria y de la transferencia de una parte de la renta agraria (la renta diferencial) a la industria gracias al diferencial de precios entre los internacionales y los cobrados por los productores agropecuarios. Para apropiarse de una parte de la renta agraria, el gobierno instauró a través del IAPI un mecanismo de dirección y control de las exportaciones. El IAPI compraba la totalidad de la cosecha de trigo y los cupos de exportación de los otros cereales, dejando al sector privado lo destinado al consumo nacional. También adquiría la semilla y el aceite de las oleaginosas y realizaba las exportaciones de los productos ganaderos.

Ahora bien, luego de un corto primer período de la posguerra, y además de la caída de las exportaciones de granos (salvo en 1951 como consecuencia de la guerra de Corea), el derrumbe de los precios agropecuarios internacionales a partir de 1949 provocó la deterioración de los términos de intercambio - es decir, la brecha entre los precios de los insumos industriales importados y los agropecuarios exportados - y desmejoraron la capacidad del país de hacerse con divisas.

Para peor, los EE.UU. prohibieron que la ayuda del Plan Marshall a los países europeos pudiese ser usada para la compra de productos argentinos. Y si bien la población creció en ese período, la caída de la producción de granos fue constante de 1940 a 1954⁴¹. Para colmo, la agricultura sufrió una gran sequía en 1951-1952. Por otra parte, la exportación de carne experimentó una fuerte contracción a partir de 1946⁴². Los saldos del comercio exterior serán negativos de 1949 a 1952 (con una pequeña excepción en 1950). Todo ello dio lugar a las fuertes caídas del PIB y de la inversión a partir de 1949⁴³. Amén de una fuerte aceleración de la inflación.

Más tarde, el desbloqueo se transformó en la inconvertibilidad de ese saldo en otras divisas [Rapoport, *op.cit.*, pp. 388-391].

⁴¹ La producción de trigo cayó de 31,9 millones de toneladas en el período 1940-1944 a 26,4 millones en 1945-1949 y a 29,4 millones en 1950-1954. La de maíz disminuyó de 32,9 millones en el primer período a 18,9 millones en el segundo y a 15,3 millones en el tercero. [[D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 231]. Ello fue, por una parte, el resultado de la emigración de la población rural a las ciudades y, por otra, de la falta de inversión en el agro resultante de las relaciones existentes entre el latifundista y el chacarero arrendatario o aparcerero, dado que la incertidumbre de la situación contractual - producto del congelamiento de los contratos y de los desalojos - hacía que ni el propietario ni el chacarero invirtieran en la explotación.

⁴² Tomando como base el índice 100 en 1950, las exportaciones ganaderas pasaron de 130 en 1946 a 84 en 1949, a 60 en 1951 y a 64 en 1952. [*Ibidem*, p. 235]

⁴³ Entre los bienios 1949-1950 y 1947-1948, la caída de la inversión fue del 15,8%; entre 1951-1952 y 1949-1950 fue de 1,4% y entre 1953-1954 y 1949-1950 fue del 5,2%. [M. Rapoport, *op.cit.*, p. 381]

La situación de crisis económica generó no sólo la caída del empleo industrial en la población activa del 28,3% de 1949 al 25,1% en 1952, sino también el descenso de la masa salarial total en el ingreso nacional que de 49% en 1949 pasó a 45,2% en 1951 para volver a estabilizarse en torno de 50% entre 1952 y 1954⁴⁴.

19.- Para tratar de salir del atolladero en que se encontró la economía a partir del déficit de la balanza de pagos y de la inflación, el gobierno peronista apuntó * a reducir las importaciones de productos industriales (salvo los necesarios para la producción agrícola); * a favorecer con la política de precios la producción agropecuaria de productos exportables; * a contraer el consumo de la población para minimizar la demanda tanto de productos industriales como de productos agropecuarios (para generar un superávit para exportar); reducir el déficit fiscal mediante la disminución de gastos de capital, de los subsidios a las empresas del Estado y de las compras de bienes y servicios; y * a atraer inversiones de capitales extranjeros. Todo ello iba a contramano de las banderas que el peronismo había izado hasta ese momento.

A partir de 1949 y hasta 1955 la caída en los precios internacionales hizo que las compras del IAPI se liquidaran a valores superiores a los vigentes internacionalmente, generando así subsidios para el sector agropecuario. En 1953 los precios del trigo pagados a los agricultores eran dos veces y media más altos que en 1948 y los precios minoristas de alimentos se triplicaron en dicho período. Además, el gobierno liberó los precios de las carnes, al tiempo que el Estado subsidiaba fuertemente a los frigoríficos para fomentar las exportaciones a precios competitivos. La misma Sociedad Rural Argentina se felicitaba por la nueva política del gobierno peronista⁴⁵.

La devaluación de la moneda⁴⁶, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y el reajuste de las tarifas públicas aceleraron el brote inflacionario que, entre 1949 y 1952, provocó una caída del 26% del poder adquisitivo de los salarios⁴⁷. La reacción obrera no se hizo esperar. Según D. Rubinzal,

“El desmejoramiento de las condiciones económicas impulsó protestas obreras en los frigoríficos, en la industria azucarera y en los gremios gráficos, ferroviario y bancario. Una de las huelgas más resonantes fue la que llevaron adelante los trabajadores ferroviarios de la línea Roca, a finales de 1950, que se terminó extendiendo a casi todas las otras líneas. (...) La reacción del propio presidente (no fue) conciliadora : intervino la Unión Ferroviaria y despidió a los delegados y activistas que dirigían la huelga. Los trabajadores respondieron

⁴⁴ *Ibidem*, *op.cit.*, p. 404.

⁴⁵ D. Rubinzal, *op.cit.*, pp. 253 y 262-263.

⁴⁶ En 1949 el peso sufrió una devaluación del 90% respecto al dólar estadounidense.

⁴⁷ M. Rapoport, *op.cit.*, p. 405.

declarando un paro general por tiempo indeterminado a partir del 7 de enero de 1951. Perón redobló la apuesta declarando ilegal la medida de fuerza, con el apoyo de la propia CGT, y habilitando por decreto a personal militar para que hicieran funcionar los trenes. Centenares de trabajadores fueron despedidos y muchos fueron encarcelados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”⁴⁸.

Por su parte, J. Godio sostiene que

“En 1954 se produjo el quiebre de la “verticalidad sindical” : primero fueron a la huelga los obreros metalúrgicos y pronto los siguieron trabajadores de otras actividades por aumentos salariales. En 1954 se perdieron 1.401.797 días de trabajo por huelgas, tres veces más que los días perdidos entre los años 1951-1953. La reacción de Perón fue aumentar los salarios (en un 15%, ndr.), pero ello le enajenaría aún más el limitado apoyo que recibía de los empresarios, incluido el apoyo que recibía de la oficialista CGE”⁴⁹.

El gobierno arrió la bandera nacionalista y lanzó una campaña de seducción del capital internacional. En 1953 el Parlamento aprobó una ley de inversiones extranjeras que ampliaba de un 5% a un 8% del capital invertido en empresas industriales y mineras los topes para las remesas de ganancias al exterior y para la repatriación de capitales, a la vez que las eximía total o parcialmente de impuestos por las importaciones de maquinarias y equipos. Y en 1954 el gobierno anunció tratativas con empresas extranjeras para la explotación del petróleo que se concretaron en abril de 1955 con un acuerdo leonino con la Standard Oil⁵⁰.

⁴⁸ D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 260.

⁴⁹ J. Godio, *op.cit.*, p. 928.

⁵⁰ Este acuerdo (que no llegó a ser ratificado por el Parlamento por la caída del régimen peronista) abdicaba toda la retórica nacionalista del peronismo y contemplaba la exploración y explotación durante 40 años de un inmenso yacimiento de 50.000 km cuadrados en Santa Cruz (el que representaba más de la quinta parte de la provincia actual). La empresa debía ceder al Estado el 50% de la producción y vender a la empresa estatal YPF el otro 50% a precio internacional. El Estado exceptuaba a la empresa estadounidense de toda carga impositiva y le otorgaba la libre exportación de sus ganancias. La Standard Oil podía romper el contrato sin costo, en tanto que el Estado debía pagar con una fuerte indemnización el no respeto de algunas de sus cláusulas. Además, “*El acuerdo autorizaba a la compañía a crear una policía particular y a construir aeropuertos para su uso privado; garantizaba la inviolabilidad por las autoridades argentinas de la zona asignada, la cual, frente al Atlántico Sur, tenía una importancia estratégica considerable y era objeto de un viejo conflicto de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña (zona antártica, ocupación inglesa de las Islas Malvinas)*” [Rapoport, Mario & Spiguel, Claudio. “Les États-Unis et l’Argentine de Peron”, L’Harmattan, 1998, p. 261].

Perdiendo su rol de motor industrializador con la intención de aliviar la balanza de pagos, retrayendo la importación de bienes de producción por falta de divisas, reduciendo el gasto público para tratar de controlar la inflación, otorgándole al campo la centralidad de la inversión nacional y a la burguesía agraria el beneficio de la política de precios y la seguridad jurídica de sus propiedades, reduciendo la capacidad adquisitiva de los trabajadores para liberar un surplus exportable, congelando los salarios y ligando ulteriormente su evolución al “aumento de la productividad del trabajo”^{51/52}, desmintiendo su pretensión de asegurar la “independencia económica” de la Nación al ofrecer grandes prebendas al capital extranjero, entre 1949 y 1955 el accionar del gobierno bonapartista iba a contramano de sus inflamados discursos “pro-trabajador”, pro-industrializador, anti-oligárquico y antiimperialista, debilitándose políticamente y socavando sus bases de sustentación.

En ese período fueron desapareciendo en un *in crescendo* inexorable las bases del equilibrio bonapartista, basado objetivamente en las conquistas que de 1946 a 1948 la clase obrera había arrancado al régimen y a la burguesía y que estaban compensados económicamente con la política gubernamental de créditos y subsidios estatales a las empresas industriales. El descontento de la misma burguesía industrial agrupada en torno de la CGE se cristalizó en el reclamo de la derogación de los precios máximos, el aumento de las importaciones de materia prima, de petróleo, de maquinarias y de bienes de producción, en un política crediticia más generosa, una reducción de impuestos, la disminución de cargas sociales y del régimen de jubilaciones.

Una expresión de la crisis del régimen fue el “Congreso Nacional de la Productividad y del Bienestar Social” convocado con bombos y platillos en marzo de 1955, en un intento desesperado para mantener el equilibrio entre el proletariado y la burguesía industrial en ausencia de las condiciones materiales que la habían hecho posible en el pasado.

La burguesía industrial y el gobierno peronista pretendían aumentar la producción y los márgenes de ganancia de las empresas incrementando lo que Marx llama la “plusvalía absoluta”, es decir, la intensidad del trabajo de los obreros y el tiempo de trabajo. Pero el contexto político echará por tierra el intento de lograrlo “por las buenas” y serán los militares quienes lo impondrán por la fuerza a partir de septiembre de 1955, dando por terminado el ciclo histórico iniciado con el golpe de Estado de 1943.

⁵¹ Ello estaba contemplado en el 2° Plan Quinquenal aprobado en 1952 y reiterado en el Congreso de la Productividad de 1955. En 1952 el gobierno congeló nuevamente precios y salarios por dos años más, lo que en la práctica sólo valía para los salarios. El incremento promedio del 12% de los salarios en 1954 no compensó las pérdidas de los años precedentes.

⁵² Por su política pro-patronal y pro-estatal, el Secretario General de la CGT fue silbado por los trabajadores en la concentración del 17 de Octubre de 1952 que tuvo lugar en la Plaza de Mayo. [A. Rouquié, *op.cit.*, p. 415]

Antes de abordar proceso político que llevará al derrumbe del régimen peronista, trataremos brevemente de su política agraria y de su supuesto antiimperialismo.

LA REFORMA AGRARIA DEL RÉGIMEN PERONISTA

20.- En las elecciones de 1946, el Partido Laborista había levantado la bandera de la Reforma Agraria que debía tener como objetivos “la división de la tierra y crear una clase media rural” con la intención de dar la propiedad de “*la tierra a quienes la trabajan*” y terminar de esta manera con los “latifundios improductivos” o mal explotados. Pero Perón dio una clara señal de los límites de la política agraria de su primer gobierno nombrando como ministro de la Agricultura a Juan Carlos Picazo Elordy, él mismo estanciero y representante de la oligárquica Sociedad Rural. Y si antes de las elecciones de 1946 el discurso de Perón iba dirigido contra los latifundios, poco después irá dirigido a favor de las grandes explotaciones y contra el peligro de que la reforma agraria provocase la generalización de los minifundios.

En 1952, el Censo Nacional Agropecuario estimaba en 131 millones de hectáreas (ha) las tierras con cultivos de cereales (trigo, maíz, centeno y avena). La superficie agrícola-ganadera de toda la región pampeana era de aproximadamente 137 millones de ha, en tanto que la de la provincia de Buenos Aires era de 77 millones de ha⁵³. El clásico libro sobre la cuestión agraria de Barsky & Gelman estima la superficie de la pampa húmeda en 52,3 millones de ha⁵⁴.

Para apreciar la dimensión del problema agrario en la región pampeana, basta con decir que en ella los arrendatarios y aparceros cultivaban el 65% del total de la superficie en 1947, es decir, aproximadamente 89 millones de ha de la región pampeana.

El objetivo proclamado de la Reforma Agraria era dar acceso a la propiedad a los campesinos que trabajaban la tierra de los terratenientes bajo los regímenes de arrendamiento y de aparcería⁵⁵. El Censo agrario de 1947 calcula en 173.500 del número de propietarios de tierras

⁵³ Según información del INDEC de 2003

[<http://www.fao.org/3/y5210s/y5210s06.htm#TopOfPage>]

⁵⁴ Osvaldo Barsky & Jorge Gelman, “Historia del agro argentino – Desde la Conquista hasta comienzos del siglo XXI”, Ed. Sudamericana, 2009, p. 169.

⁵⁵ El régimen de arrendamiento es el del alquiler del campo en el cual el campesino paga al propietario un monto anual que no depende de las vicisitudes y de los resultados de la explotación. El régimen de aparcería establece las condiciones de explotación, de la participación eventual en los insumos y la repartición del producto de la explotación. Históricamente, en el campo argentino una de las funciones de estos dos regímenes de explotación consistía en preparar los campos durante un cierto número de años (en general 3 o 4) para la explotación ganadera del terrateniente mediante la siembra de alfalfa. Al cabo de ese

(latifundistas y chacareros) que trabajaban el 52% de la superficie total de propiedad privada; en 219.000 el número de arrendatarios y titulares de formas de tenencia no propietarias de tierras (como aparceros, medieros y ocupantes gratuitos) que trabajaban el 48% de la superficie total de propiedad privada y representaban el 56% de las explotaciones agropecuarias en tierras no estatales, en tanto que los peones rurales permanentes superaban los 370.000 y los trabajadores rurales temporales o de cosecha rondaban los 400.000⁵⁶.

La destrucción del régimen basado en el binomio latifundio-aparcería (o arrendamiento) era una necesidad para promover un pujante desarrollo capitalista del país en general y de la agricultura en particular. Sólo el acceso directo y sin indemnización a la propiedad de la tierra (o a su usufructo irrestricto) por parte del campesinado hubiese permitido un fuerte auge de las inversiones productivas y de tecnología agraria que hubiera creado un amplio mercado para la industria. Pero la Reforma Agraria promocionada por el peronismo será una timorata, raquítica y muy limitada reforma “desde arriba”, decidida, ejecutada y realizada por el Estado mismo, sin la participación activa ni de los asalariados ni de los campesinos, amén del hecho de que sus (pocos) beneficiarios debieron asumir el costo de la indemnización de los (pocos) latifundistas expropiados.

Tras dos años en el gobierno, en septiembre de 1948, Perón se jactó de haber distribuido ... 200.000 ha, es decir, una gota de agua en la pampa húmeda⁵⁷. En 1950, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, declaró haber expropiado y tomado posesión de 27 latifundios por un total de 147.462 ha⁵⁸.

Si la política de expropiación de los latifundios ya era menos que indigente entre 1946 y 1950 (y desde 1948 un decreto gubernamental había limitado drásticamente la posibilidad de iniciar juicios expropiatorios), después de 1952 la colonización fue limitada en la práctica a tierras fiscales, se paralizaron los juicios ya iniciados de expropiación e incluso se restringieron los créditos para la adquisición de los campos por parte de los chacareros. A partir de entonces, y

período el chacarero (que trabajaba con la mano de obra familiar - y en ciertos casos en época de siembra y de cosecha debía contratar obreros agrícolas - tenía que abandonar la superficie (generalmente de unas 200 hs) que la había sido atribuida por el latifundista con la esperanza de poder renovar el contrato en otro lote del latifundio.

⁵⁶ Mario J. Lattuada, “La política agraria peronista (1943-1983)/1, Centro Editor de América Latina, 1986, p. 41 y 67.

⁵⁷ Discurso del Perón en el acto inaugural del Monumento al Agricultor, en Esperanza, el 8 de septiembre de 1948, citado en Mónica Alejandra Blanco, « “Reforma agraria”: discurso oficial, legislación y práctica inconclusa en el ámbito bonaerense, 1946-1955 ». [http://bibliotecadigital-old.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v9_n17_04.pdf]

⁵⁸ Según un autor citado por J. Godio (op.cit., p. 927), “en 1955 las medidas de Perón de colonización y distribución de la tierra habían ayudado a sólo 3.200 familias de agricultores”.

dado el contexto económico del país, todo el esfuerzo del gobierno tendió “tranquilizar el ambiente” agropecuario con la intención de asegurar un “clima” favorable al incremento de la producción agrícola⁵⁹.

La medida que sí tuvo un efecto importante sobre las relaciones sociales en la agricultura fue el congelamiento de los arrendamientos y la prohibición de desalojos que ya regía desde 1943⁶⁰. La inflación terminó por devaluar los ingresos de los propietarios que arrendaban sus propiedades⁶¹. A los *terratenientes ausentistas* no les quedaba otra posibilidad que vender sus propiedades, o subdividirlas y venderlas a los arrendatarios económicamente sólidos o con acceso a créditos bancarios (en cuyo caso se trataba de campesinos medianos y ricos), o bien ponerse personalmente a trabajarlas. Fue así cómo en la región pampeana los arrendatarios y aparceros que cultivaban el 65% del total de la superficie en 1947 pasaron a cultivar el 35.8%

⁵⁹ Resumiendo las orientaciones agrarias del régimen, Perón declaró en junio de 1953 * que hasta ese momento habían entregado 500.000 ha a los campesinos; * que la reforma agraria debía comenzar con la entrega de tierras fiscales; * que el objetivo era hacer producir a las tierras improductivas en las zonas de gran producción [ahora bien, las tierras trabajadas por los arrendatarios y aparceros sí eran productivas, por lo cual no se justificaba la política de expropiación del propietario, ndr.]; * que en casos extremos habría que expropiar las tierras no trabajadas racionalmente *después de agotar las posibilidades para que su propietario las pusiera en producción*; * y terminaba afirmando que no se trataba de limitar las superficies máximas de las propiedades porque “*el latifundio no se califica por el número de hectáreas o la extensión de la tierra que se hace producir, (sino) por la cantidad de hectáreas, aunque sean pocas, que son improductivas. Dios nos libre si fuéramos tan cortos de entendimiento que nos lanzáramos a la destrucción de las grandes explotaciones, teniendo las inmensas extensiones que tenemos nosotros para que cada agricultor argentino pueda tener todo el campo que se le antoje*”. En esas condiciones, con un poco de buena voluntad de su parte, ningún terrateniente podía ser expropiado. [Mónica Alejandra Blanco, *art.cit.* y D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 263]

⁶⁰ La ley 13.246 de 1948 sobre arrendamientos y aparcerías estableció una estabilidad de 8 años y se otorgaba, además, la posibilidad de una revisión del precio del arrendamiento en los casos de que existiera un desequilibrio entre el costo de producción y el precio del arrendamiento o en el caso de pérdida total o parcial de la cosecha. También se le permitía al arrendatario destinar 30% de la superficie a la explotación ganadera y se le reconocía el pago de indemnizaciones por las mejoras introducidas en el predio. Por su parte, los propietarios sólo podían desalojar a sus arrendatarios en caso de abandono del predio o por el incumplimiento del contrato y podían pedir la excepción de la prórroga en aquellos casos en que no siendo propietarios de otras parcelas desearan explotarla en forma directa o en caso de que siendo propietario de otras parcelas uno de sus hijos quisiera explotarla por su cuenta.

⁶¹ “Según un estudio realizado por el CIDA, los ingresos percibidos por arrendamientos en dinero habrían disminuido en más de un 80% entre los quinquenios de 1935-1939 y 1950-1954”. [M. Lattuada, *op.cit.*, p. 117]

en 1960⁶², sea por la adquisición de tierras, sea por haber caído en la ruina, sea por haber sido desalojados. En ese sentido, la política agraria del peronismo significó un paso adelante hacia formas más acabadas de relaciones de producción capitalistas en el campo.

Al término de los dos gobiernos peronistas, *las políticas de colonización, nacionales y provinciales, sólo afectaron alrededor de 5% del área que estaba ocupada por arrendatarios y aparceros*⁶³. El 50% de las tierras agrícolas seguía siendo explotada en forma deficiente, un 3,4% estaba ocupada por minifundios (que en 1960 representaban 43% de las explotaciones⁶⁴), un 20% estaba arrendada en condiciones precarias, un 25% correspondía a latifundios que no explotaban plenamente sus potencialidades naturales (dedicados fundamentalmente a la ganadería extensiva), y el 70% de las tierras de la pampa húmeda seguía siendo propiedad del 15% del total de los establecimientos⁶⁵.

En síntesis, la política del régimen peronista no alteró *la distribución de la propiedad agraria*. “*La propiedad de la tierra para quienes la trabajan*” no fue más que un eslogan agitado demagógicamente, sobre todo antes de las elecciones de 1946. Los pasos modernizadores del capitalismo agrario se dieron en beneficio de los *junkers* y los *kulaks*, los grandes propietarios y la burguesía agraria.

Las relaciones entre los EE.UU. y el régimen peronista

21.- Los movimientos de la izquierda peronista de los años 1970 pretendieron ver en Perón y en sus dos primeros gobiernos a protagonistas de la lucha contra el imperialismo americano, a representantes de la marea revolucionaria anticolonialista y antiimperialista que se expandirá por Asia, África y Latinoamérica a partir de los años 1940-1950. Semejante apreciación estaría corroborada por el enfrentamiento pre-electoral de 1946 (“¡Braden o Perón!”), por las violentas campañas de la prensa estadounidense en contra del régimen peronista, por las inflamadas diatribas de Perón contra “la oligarquía y el imperialismo”, por la proclamación de la “Tercera Posición” que pretendía llevar adelante una política internacional independiente de las dos potencias mundiales enfrentadas durante la “guerra fría”. Pero tal apreciación no cuadra con múltiples datos históricos.

⁶² D. Rubinzal, *op.cit.*, p. 227.

⁶³ Javier Balsa, “Discursos y políticas agrarias en Argentina, 1920-1955”. [https://www.researchgate.net/publication/262661121_Discursos_y_politicas_agrarias_en_Argentina_1920-1955]

⁶⁴ CONADE, “Tenencia de la tierra”, 1964.

⁶⁵ D. Rubinzal, *op.cit.*, pp. 227-228.

« En una entrevista [en el año 1948] con el embajador de los EE.UU. James Bruce (Perón) le manifestó que sus actitudes antinorteamericanas habían sido retórica para el uso interno, que la “Tercer Posición” era un recurso político para tiempos de paz y que en caso de una guerra entre EE.UU. y la URSS, Argentina se alinearía con los EE.UU. »⁶⁶. Esta posición fue confirmada en mayo de 1950 y en 1953, cuando “Perón reafirmó a su interlocutor (Milton Eisenhower) la vocación occidental de la Argentina y precisó que nunca se alinearía junto a los enemigos de los Estados Unidos”⁶⁷.

Cuando estalló la Guerra de Corea, Perón se alineó con los EE.UU. comunicando su intención de transformar en ley el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si finalmente el gobierno argentino no envió efectivos militares para participar en esta guerra fue el resultado de las movilizaciones de calle de los trabajadores de Rosario y de Buenos Aires provocadas por la noticia de una probable participación en la guerra⁶⁸.

En 1954, en ocasión de la X Conferencia Interamericana de Caracas, la resolución “anticomunista” que justificará más tarde el apoyo de los EE.UU. a la intervención militar que derrocó al gobierno guatemalteco sólo tuvo el voto en contra de Guatemala, en tanto que la Argentina de Perón se abstuvo. Y en ocasión del derrocamiento del gobierno guatemalteco “Perón aseguró al embajador de los EE.UU. que el ex embajador de Arbenz no podría dar una conferencia pública y que ningún parlamentario oficialista participaría en la reunión de solidaridad con el gobierno derrocado organizado en Santiago de Chile”. Algunos exiliados (guatemaltecos) fueron incluso encarcelados (en Argentina) en la prisión de Villa Devoto para luego ser enviados a Polonia⁶⁹.

En realidad, la política internacional del régimen peronista no estaba basada en el antiimperialismo, sino en un nacionalismo cuya brújula era la industrialización del país. Una vez terminada la guerra, durante la cual los gobiernos argentinos mantuvieron una política neutralista, debiendo enfrentarse con EE.UU. quien exigía de los países latinoamericanos declaraciones de guerra contra las potencias del Eje, los roces del régimen peronista con el imperialismo americano estuvieron provocados básicamente por las trabas que la política económica de los EE.UU. representaban para la economía argentina y por los intentos del gobierno peronista de poner *ciertos límites* a la integración pura y simple de la Argentina en el sistema de defensa continental concebido durante la “guerra fría”. Esta resistencia fue a

⁶⁶ J. Godio, *op.cit.*, p. 923 y Rapoport & Spiguel, *op.cit.*, p. 111.

⁶⁷ Rapoport & Spiguel, *op.cit.*, pp. 92 y 218.

⁶⁸ *Ibidem*, pp. 123-124.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 244.

“geometría variable”, función de las vicisitudes de las relaciones económicas entre los EE.UU. y el régimen peronista⁷⁰.

A partir de 1948, cuando Argentina había prácticamente agotado sus reservas internacionales acumuladas durante la guerra, el principal obstáculo a su proyecto de industrialización estuvo representado por su muy limitada capacidad de acumulación de saldos de comercio exterior en dólares y, por ende, por la escasez de divisas para la compra en los EE.UU. de bienes de capital e insumos industriales.

La atribución de las subvenciones del Plan Marshall financiado por los EE.UU. a los países europeos tenía como condición la no utilización de esos fondos para la compra en Argentina de productos agropecuarios, puesto que en estos rubros los EE.UU. y Argentina eran competidores. Además, los primeros recurrían a todo tipo de maniobras para hacerse con los mercados agropecuarios (entre las cuales estaba el dumping y la posibilidad de hacer pagar sus exportaciones en la moneda del país comprador). Por este motivo, el acceso argentino al mercado estadounidense era muy limitado. De allí que el régimen peronista pusiese tantas esperanzas en la demanda de materias primas resultante de la guerra de Corea y en la eventualidad de una próxima guerra mundial. Por otra parte, los EE.UU. eran entonces, salvo excepción, los únicos que estaban en condiciones de proveer a Argentina en bienes de capital.

Los intentos del gobierno peronista por desarrollar el comercio con el bloque soviético estaban muy lejos de las necesidades de la industria local. Y la tentativa de generar un bloque comercial del Cono Sur con Chile y Brasil no tenía mayores proyecciones. Por consiguiente, dejando de lado las dificultades propias de la balanza de pagos de Argentina, la única alternativa que tenía el gobierno para tratar de resolver la “cuadratura del círculo” de la industrialización del país era abrir las puertas a las inversiones estadounidenses, para quienes la Argentina, dada su sed de capitales, constituía un mercado promisorio.

La dificultad de compatibilizar “el hambre (de inversiones del régimen peronista) con las ganas de comer (de los inversores estadounidenses)” residía en las limitaciones que el Estado argentino impuso a la repatriación anual - en divisas fuertes - de las ganancias de las empresas extranjeras (fijadas finalmente en un 8% de los capitales invertidos), a la exclusión de la actividades agropecuarias, forestales y pesqueras de las áreas de inversiones extranjeras, a la registración del capital extranjero en moneda nacional al cambio en vigor en el momento de la operación, a la prohibición de financiamiento nacional de empresas extranjeras y a la exclusión de inversiones en empresas competidoras de las nacionales ya existentes.

El endurecimiento negociador de los capitales estadounidenses y del Departamento de Estado fue tanto más grande cuanto más grandes fueron las dificultades de la economía argentina.

⁷⁰ En su libro sobre las relaciones entre los EE.UU. y la Argentina de Perón, M. Rapoport y C. Spiguel detallan minuciosamente el estrecho vínculo entre los “tiras y aflojes” entre el gobierno peronista en torno a cuestiones de geopolítica y los relacionados con las cuestiones económicas.

Finalmente las relaciones de fuerzas entre el imperialismo americano y el régimen peronista llevaron a la capitulación del gobierno con la aprobación del proyecto de explotación petrolera de la Standard Oil. Y si bien - como consecuencia de su caída - no fue el régimen peronista quien concretizó la apertura de par en par del mercado argentino a los capitales estadounidenses, su etapa final constituyó el prolegómeno de una tendencia inexorable.

Hacia la caída del régimen peronista

22.- La victoria electoral de Perón en 1946 dejó a los partidos de la Unión Democrática en estado catatónico. Su gobierno, heredero reivindicado del régimen militar, había sido democráticamente elegido y contaba con un amplio apoyo popular. Estaba claro que, por mucho tiempo, el Partido Radical no sería una opción electoral. En cuanto a los partidos socialista y comunista, su integración en la Unión Democrática los había llevado a un suicidio político que los mantendrá en un estado vegetativo del cual ya nunca más podrán salir.

En esas condiciones, durante tres años Perón pudo dedicarse a estructurar un “movimiento justicialista” policlasista, a conformar el Partido Peronista, a “poner orden” en sus filas abarrotadas por la rápida afluencia de fuerzas nacionales y provinciales heteróclitas, a liquidar la corriente laborista, a “verticalizar” al movimiento sindical y a poner a punto el aparato de propaganda en torno al “culto de la personalidad” al estilo peronista, con marchita y todo, a la gloria del “Líder”, del “Conductor” y del “Primer Trabajador”. Esa primera etapa política de su gobierno estaba terminada en 1948.

Las condiciones generales estaban dadas para concretar una reforma de la Constitución cuyo objetivo principal era la continuidad del régimen con la reelección de Perón por medio del sufragio directo. Esto ocurrirá en 1949, en el preciso momento en que la economía argentina iniciaba un largo período de crisis que anunciaba el agotamiento del proceso de sustitución de las importaciones financiado con la renta agraria.

En las elecciones para convencionales constituyentes de diciembre de 1948 el peronismo obtuvo el 59,1% de los votos. Por ello mismo, la oposición parlamentaria, la oligarquía y buena parte de las clases medias – horrorizadas por el protagonismo y la participación de la CGT en las estructuras institucionales del Estado, por los nuevos derechos sociales de los trabajadores como por los demagógicos discursos incendiarios, “anticapitalistas”, “antiimperialistas”, “contra la oligarquía” y a favor de los “descamisados” y de los “cabecitas negras”⁷¹

⁷¹ Perón fue el único político que comprendió que el proletariado argentino tenía una componente étnica conformada por trabajadores de sangre negra e indígena, quienes siempre han sufrido una discriminación social por parte de la población descendiente de europeos. Las violentas arengas de Perón dirigidas a las masas obreras hacían vibrar el sagrado odio de clase de aquéllas en beneficio de un proyecto burgués.

pronunciados por Perón y su esposa Eva Duarte – no podían esperar reconquistar el poder por medios electorales en las elecciones presidenciales de noviembre de 1951.

Adelantándose a esa fecha, con el apoyo tácito de toda la oposición parlamentaria, en un levantamiento militar al “estilo Brancalone” que sólo podía caber en la cabeza de un general retirado de caballería montada, en septiembre de 1951 un puñado de oficiales fracasaron en el intento de arrastrar a gran parte de la oficialidad y a la suboficialidad con mando de tropa en Campo de Mayo (Buenos Aires).

Por su capacidad de ocupación territorial, el Ejército siempre fue el arma con mayor peso político. Desde un inicio, la oficialidad de la Armada fue epidérmicamente antiperonista, mientras que la oficialidad del Ejército (sobre todo del cuerpo de artillería, mucho más técnico que el de la reticente caballería y con una fuerte componente de hijos de inmigrantes) fue inicialmente un firme sostén del gobierno. La situación comenzará a cambiar con la evolución de la situación económica y política.

Si bien los rangos medios de la oficialidad del Ejército podían ver con buenos ojos la subsunción del movimiento obrero a los “intereses supremos de la Nación” y del Estado, por ideología e instinto de clase les era difícil ver a sus representantes oficiales ocupar un lugar privilegiado en las estructuras estatales y en la retórica del régimen.

La política del peronismo hacia la suboficialidad con la intención de consolidar la “lealtad” del arma provocó en la oficialidad el temor de ver desvanecer los rígidos y altos muros sociales y de casta que separaban a ambos estratos jerárquicos del aparato militar⁷². Además, la crisis económica provocó una importante restricción en los gastos militares. Y la política institucional de “peronización” del Ejército a partir de la asonada militar de septiembre de 1951 y de un intento conspirativo de febrero de 1952 generó fuertes resquemores en el arma.

Los renovados conflictos entre obreros y patrones, la inflación de precios, los violentos discursos de Perón, la represión sobre la oposición parlamentaria (y no sólo la de ella) y el endurecimiento del régimen en un sentido totalitario⁷³ pusieron a su vez al desnudo la irrealidad de la mentada “Comunidad Organizada”.

⁷² Para afianzar sus apoyos en el Ejército, en 1948 el gobierno otorgó a los suboficiales el derecho al voto, favoreció la integración de sus esposas e hijos en los empleos públicos y facilitó con becas estatales el acceso de sus hijos a los liceos militares (que anteriormente estaban abiertos casi exclusivamente a las clases medias y altas) y construyó barrios de suboficiales en las cercanías de los regimientos. [A. Rouquié, *op.cit.*, pp. 398-399]

⁷³ El Congreso aprobó en 1950 una ley sobre “traición y espionaje” y otra sobre “desacato”. Hubo detenidos de la oposición bajo estas leyes y numerosos dirigentes radicales y socialistas se exiliaron en Montevideo. Por medio de presiones estatales, a través del control del suministro de papel prensa y de paros por parte del sindicalismo peronista, gran parte de la prensa y de las

Finalmente, el levantamiento popular de abril de 1952 en Bolivia, en el que el proletariado minero tuvo el papel decisivo y provocó la derrota y la desarticulación del Ejército boliviano, no podía dejar de generar las más hondas inquietudes en la oficialidad argentina. Tanto más cuanto que, luego del aplastamiento de la asonada de septiembre de 1951, Eva Perón, el secretario general de la CGT y el comandante en jefe del Ejército tomaron la decisión de la compra - con los fondos de la Fundación Eva Perón - de 5.000 pistolas automáticas y de 1.500 ametralladoras para la eventual formación de milicias obreras en defensa del régimen, cosa que Perón rechazó entregando las armas compradas al Ejército.

Para poder tener posibilidades de vencer, una asonada militar debía encontrar aún un contexto político-social que no dependía de su mera iniciativa y que sólo se concretará cuatro años más tarde, cuando la crisis económica, el desapego creciente hacia el régimen de sectores enteros de la burguesía industrial unida a la oposición constante de la oligarquía y de las clases medias urbanas, y - *last but not least* - el violento enfrentamiento con la Iglesia Católica, dará lugar a un frente de oposición político y social que hará que un sector de las fuerzas armadas, *con apenas un empujón*, provocará la renuncia y la huida sin combate de Perón y echará por tierra al régimen peronista.

23.- La aplastante victoria de Perón y del Partido Peronista en las elecciones presidenciales de 1951 (con el 62,5% de los votos emitidos y el 55% de los inscriptos en el padrón), amén de obtener todas las gobernaciones, dejaba presagiar larga vida al régimen bonapartista⁷⁴.

Hasta ese momento el régimen continuaba gozando de la bendición de la Iglesia Católica. Pero sus relaciones con la Iglesia estaban basadas en intereses limitados.

Para el peronismo de 1946 - como para el régimen militar instaurado en 1943 - el apoyo de la Iglesia le permitía consolidar un poder con limitados apoyos institucionales. En el caso de la Iglesia se puede decir lo mismo que afirmaron Benjamín Disraeli (primer ministro británico) o John Quincy Adams (el sexto presidente de Estados Unidos) : *“los estados no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes”*.

La jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, así como la Acción Católica (su brazo secular), entroncadas con la “tradición hispana”, estaban inspiradas en el más puro clericalismo político-ideológico que no tenía nada mucho que envidiarle al integrista islámico actual. Para ellas no se trataba solamente de defender la “pureza” del “catolicismo apostólico romano” del pueblo argentino, sino la alianza del Estado y de la Iglesia para conformar una sociedad en que rigiesen

radios quedaron en manos del oficialismo, quien pudo controlar así la información pública y excluir de ella a la oposición.

⁷⁴ Ese *espejismo electoral*, supuesto índice de la solidez del régimen, volverá a darse en las elecciones legislativas de abril de 1954, en las cuales el peronismo obtuvo el 63% de los votos emitidos y el 54,1% del padrón electoral.

sus “principios morales” más reaccionarios. En ese contexto, el peronismo - declaradamente cristiano, anticomunista y antiliberal - era para ellas un aliado político privilegiado, al que le ofrecieron un apoyo institucional e ideológico y gran cantidad de adeptos y personal político. El idilio público entre el Perón y la Iglesia fue constantemente reiterado durante los primeros años del gobierno peronista.

Pero la ratificación legislativa en 1947 de la educación religiosa en las escuelas públicas, el generoso financiamiento estatal de la Iglesia, de sus ramificaciones organizativas y educativas, la no separación de la Iglesia del Estado reafirmada en la Constitución de 1949, la exoneración de cargas fiscales y el incesante reclamo al cristianismo como “inspirador del “justicialismo”, todo ello era para Perón la manera de “atar” a la Iglesia Católica al carro del bonapartismo peronista. Para esta última, por el contrario, se trataba de dar un primer paso en la vía de la instauración de una sociedad cristianizada “desde arriba”, a la manera del franquismo. Y si bien la Constitución de 1949 retomó los principios del vínculo privilegiado de la Iglesia y del Estado, del “sostén por el gobierno federal del culto católico apostólico romano” y la condición de pertenecer a esta religión para acceder a los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, el peronismo no aceptó los reclamos de la Iglesia de inscribir la religión “católica, apostólica y romana” como “religión de Estado”, ni de elevar a rango constitucional la enseñanza religiosa y la indisolubilidad del matrimonio, amén del hecho de que Perón rehusó derogar el Patronato (el sistema que regía el nombramiento de los obispos argentinos y por el cual era el Estado y no el Vaticano quien proponía los candidatos a esos cargos de la Iglesia, lo que provocó fuertes rispideces con Roma⁷⁵).

En la práctica, a pesar del espacio dado a la Iglesia con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, Perón no tenía ninguna intención de dejarle en sus manos el espacio educativo, pues intentó más tarde hacer de él un terreno de adoctrinamiento “justicialista”. Más aún, el peronismo reivindicó asumir y representar “la verdadera esencia del cristianismo”, el “cristianismo de los pobres” y hacer de Juan Perón y de Eva Perón la personificación ideal de sus principios, lo que no dejó de suscitar irritación no sólo en la Iglesia, sino también entre sus feligreses⁷⁶.

El régimen peronista avanzó en otros dos ámbitos de la actividad secular de la Iglesia : la beneficencia y la juventud. El Estado intervino la Sociedad de Beneficencia de la Ciudad de Buenos Aires (la que contaba con una amplia red de hospitales y orfanatos y estaba controlada

⁷⁵ Loris Zanatta, “Patronato nacional y conflicto con la Santa Sede en la reforma constitucional de 1949” [<http://ns1.cuco.com.ar/congresos/contenido/49CAI/Zanatta.htm>].

⁷⁶ Lila Caimari, “Perón y la Iglesia Católica. Religión, Estado y Sociedad en la Argentina (1943-1955)”, Ed. Ariel, 1994, *op.cit.*, pp. 183-183. El Estado promocionó no sólo la figura del “Líder” y su doctrina, sino también la de “Evita”, elevada al rango de “Santa” secular del pueblo argentino (para horror de buena parte de la dirección del catolicismo que veía en ella a una *parvenue* que le hacía la competencia a la “Madre de Dios”).

por las “Damas” de la catolicísima oligarquía porteña) en un intento por integrar sus estructuras en la política social estatal, lo que no le impidió fundar al año siguiente la paraestatal Fundación Eva Perón para promocionar la figura tutelar de su Presidenta. Y en 1953 fue creada la Unión de Estudiantes Secundarios adscripta al peronismo, la que constituyó una competidora directa de la Juventud Católica y fuente inagotable de rumores sobre perversiones protagonizadas por Perón y los jerarcas del gobierno.

El catolicismo argentino estaba dividido en su actitud frente al régimen. La Iglesia como institución y el sector más importante del catolicismo militante laico lo apoyó incluso en las elecciones presidenciales de 1951. Pero otros sectores minoritarios entre los obispos, los curas y los feligreses (sobre todo de la juventud de la Acción Católica a partir de los años 1950), ligados a sectores sociales opositores de la oligarquía y de las clases medias tomaron distancias con él. A pesar de todas las dádivas que el régimen peronista otorgó a la Iglesia y de la colaboración de ésta con aquél, Perón no logró alinearla de manera unitaria e incondicional detrás del poder bonapartista. Y el impasse en que estaba el régimen como resultado de la crisis iniciada en 1949 no podía más que reforzar la oposición antiperonista en el seno del catolicismo militante. Ello llevará a la ruptura entre el régimen y la Iglesia, aguijoneada por la creación en 1954 del Partido Demócrata Cristiano a iniciativa, no de la Iglesia, sino de sectores laicos del catolicismo. Los prolegómenos públicos de esa ruptura aparecieron en noviembre de 1954.

24.- Desde un inicio, desde la campaña electoral de 1946, el peronismo planteó siempre la alternativa peronismo/antiperonismo en términos radicales. El antiperonismo estaba identificado con el imperialismo, la oligarquía, el liberalismo, el socialismo y el comunismo. El peronismo se identificaba con el “pueblo”, los trabajadores, los “descamisados”, los “cabecitas negras”, el Ejército y la Iglesia.

Ahora bien, en 1954 el gobierno peronista estaba en tratativas con el imperialismo americano para la radicación de sus empresas en el país, además del hecho de haber adherido a las organizaciones americanas de defensa alineadas con los EE.UU. La oligarquía terrateniente había terminado por recibir un trato preferencial con la intención de resolver el déficit de la balanza de pagos. A partir de la intentona militar de 1951, en filigrana la lealtad del Ejército estaba en dudas. Las líneas demarcatorias de la política nacional aparecían como menos evidentes.

Los violentos e incesantes discursos de Perón contra “la reacción” eran una necesidad para que las bases de sustentación del régimen continuasen cerrando filas en su defensa. Pero, de hecho, para el gobierno, la situación de crisis y el contexto general hacía que el peligro podía venir de cualquier lado. Su inseguridad se traducía en incesantes llamados “*a (que) cada uno de los trabajadores argentinos vigile y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición*” y a “*dar la vida por Perón*”, exacerbando un clima de guerra interna.

El potencial de las fuerzas sociales antiperonistas era considerable : los industriales de la intervenida UIA, los propietarios rurales afectados inicialmente por las nuevas leyes sociales y por la expropiación de la renta agraria, amplios sectores liberales de la clase media, los docentes

obligados a practicar el adoctrinamiento peronista en las escuelas y los liceos, la gran mayoría de los estudiantes universitarios, sectores de los empleados del Estado que debían adherir al Partido Peronista para no ser despedidos, la inmensa mayoría de la oficialidad de la Armada y ciertos sectores de la oficialidad media del Ejército, sectores del catolicismo decepcionados porque veían que el peronismo no representaba la doctrina social de la Iglesia, por la deriva personalista del régimen y espantados tanto por los rumores de inmoralidad de Perón como por el nombramiento de masones en puestos gubernamentales claves. A todo ello habría que añadir en el último período a fuerzas nacionalistas decepcionadas por la política petrolera del gobierno peronista.

En 1952 el régimen denunció un proyecto de atentado contra Perón. El 15 de abril de 1953 en un acto de la CGT en Plaza de Mayo en apoyo a la figura de Perón estallaron dos bombas que provocaron 7 muertos y 93 heridos. Las masas presentes reclamaron venganza y las respuestas protagonizadas por grupos de choque nacionalistas de extrema derecha y fuerzas policiales fueron los ataques a los locales de los Partidos opositores, el incendio a las sedes de la UCR y del Partido socialista, como también del Jockey Club (al que adhería lo más granado de la oligarquía argentina), y una ola de cuatro mil detenciones de militantes y dirigentes de los partidos de todo el arco político, de católicos, de miembros de la “alta sociedad” y otras “figuras” de la sociedad argentina. Pero recién será en el segundo semestre de 1954 cuando se pondrá en marcha el proceso que llevará al derrocamiento del régimen peronista.

La tensión político-social ya era extrema cuando una chispa, la creación del Partido Demócrata Cristiano en julio de 1954 provocó un incendio con consecuencias imprevistas. Para el peronismo, la creación de ese partido significaba una clara ruptura de un sector del catolicismo para con el régimen. En la ritual manifestación del 17 de Octubre de ese año, Perón dirigió sus andanadas contra “los emboscados”, los “hipócritas mimetizados y disfrazados de peronistas” en una clara alusión a los miembros de la Juventud Católica que militaban en las organizaciones obreras, a los miembros del Partido Demócrata Cristiano e incluso a la misma Iglesia. Esa movida de Perón era un mensaje por elevación a la jerarquía eclesiástica para obligarla a desvincularse públicamente de sus “ovejas opositoras” y a “verticalizar” al catolicismo argentino. Después de años de satisfacer las grandes reivindicaciones de la Iglesia y de haberla financiado generosamente, fue la manera de Perón de decirle : “¡Con nosotros o contra nosotros!”.

La alta jerarquía de la Iglesia Católica argentina estaba en un brete. A pesar de sus roces secundarios con el gobierno, su alianza con el régimen había sido permanente. Pero le era imposible desautorizar la creación del Partido Demócrata Cristiano dado que la política del Vaticano promocionaba su creación en todas las naciones con fuertes tradiciones católicas. A partir de ese momento, las tensiones y enfrentamientos entre el régimen y el clero fueron *in crescendo*.

La siguiente movida de Perón fue contundente y de ruptura con la Iglesia y sus bases sociales. A partir de diciembre de 1954 hasta mayo de 1955 el gobierno hizo sancionar la ley de divorcio y la igualdad jurídica entre hijos legítimos y extramatrimoniales, derogó por decreto la enseñanza religiosa en la educación pública, suprimió festividades religiosas, eliminó las

subvenciones estatales a la enseñanza privada confesional, facultó a los gobiernos provinciales y a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires para permitir la apertura y el funcionamiento de prostíbulos, y terminó convocando a una Convención Constituyente para decidir la separación de la Iglesia y del Estado. Para todo el catolicismo argentino, Perón se había convertido en el Anti-Cristo.

Con la Iglesia en la oposición se constituyó un bloque de fuerzas políticas y sociales heterogéneas que veían en un golpe de Estado la única manera de acabar con el régimen. Estas iban de las corrientes del liberalismo (radicales, demócratas progresistas, socialistas e incluso “comunistas”) al clericalismo más cerrado, quienes podían contar con la voluntad golpista de la Armada y de sectores de la oficialidad del Ejército pasados a la oposición por la reciente política anticlerical del gobierno.

Con motivo de la procesión de Corpus Christi, toda la oposición se alineó detrás de la Iglesia y se dio cita el 11 de junio en Buenos Aires en una manifestación multitudinaria y de abierta y violenta oposición al régimen. Aumentando el nivel del enfrentamiento, el 14 de junio el gobierno expulsó del país a dos altos prelados de la Iglesia argentina. Como respuesta, el 16 de junio el Vaticano decretó la excomunión de los miembros del gobierno argentino responsables de la expulsión. Y ese mismo día la Armada, con el apoyo de un sector de la Aeronáutica, hizo un intento de asesinato de Perón que terminó en un baño de sangre.

Aprovechando una parada militar frente a la Casa de Gobierno, aviones de la Armada ametrallaron y lanzaron aproximadamente 12 toneladas de bombas sobre ella y sobre la multitud presente en Plaza de Mayo, e infantes de marina avanzaron y penetraron en la Casa Rosada. Perón se había refugiado previamente en el vecino edificio del Ministerio de la Guerra. Mientras tropas leales del Ejército se movilizaban para reprimir el ataque, la CGT convocó a los trabajadores desarmados en defensa del gobierno. Los trabajadores que respondieron al llamado de la Confederación y que reclamaron en vano armas el Ejército fueron a su vez ametrallados por los marinos y por un segundo ataque de la Aeronáutica. Oficialmente se habló de 300 muertos y de un centenar de heridos, pero otros testimonios hablan de un número de muertos muy superior (entre mil y dos mil).

A último momento, los jefes de la sublevación militar habían decidido postergarla, pero un desentendimiento provocó el inicio de la operación, dejándola sin el apoyo del grueso de los conjurados. No solamente las fuerzas de la Armada debían intervenir, sino también una división del Ejército. La intentona contaba con el apoyo del partido radical, del socialista y del conservador. Luego de su fracaso, 39 aviones que participaron de los ataques partieron rumbo a Uruguay.

Al caer el día, comandos peronistas incendiaron y saquearon iglesias, la arquidiócesis de la capital y sacristías, provocando una reacción de horror en amplios sectores de la oficialidad del Ejército.

El gobierno reaccionó felicitándose públicamente de que el grueso de la Armada y la totalidad del Ejército no hubiesen participado en el conato militar. La “limpieza” de la oficialidad sólo dio lugar a la baja de 106 oficiales (81 de la Armada).

Habiendo recibido el mensaje, el gobierno retropealeó apresuradamente en toda la línea. La dirección del Ejército le impuso una política de concesiones y de “pacificación” en un intento desesperado para evitar la fractura de la oficialidad que a partir de ese momento entró en estado deliberativo.

El 15 de julio Perón proclamó públicamente dar por terminada la “revolución justicialista” y afirmó poner fin a las limitaciones impuestas por el régimen a la oposición democrática, asegurándole “todas las garantías, todos los derechos y todas las libertades”. Y tendió una mano a la Iglesia haciendo reparar los destrozos provocados por sus partidarios. Todo ello era la prueba pública de su debilidad en un momento en que sólo la CGT quedaba como sólido aliado del gobierno. El enfrentamiento con la Iglesia había puesto en marcha una dinámica política que llevó al régimen a un punto sin retorno. De las tres patas del bonapartismo, fue el Ejército quien sellará su destino.

25.- El espacio dejado a la oposición generó un clima abiertamente golpista. Sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, el peronismo hizo un último intento por amedrentar a sus enemigos. El 31 de agosto Perón pronunció un violento discurso en Plaza de Mayo frente a una multitud que, ante un simulacro de dimisión, reclamaba su permanencia en el poder. El discurso de Perón fue un llamamiento a que el gobierno y el conjunto del “pueblo peronista” se preparasen a reprimir con las armas todo intento de subversión o de golpe de Estado :

“Hace poco tiempo esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Doscientos inocentes han pagado con su vida esa infamia. (...) Después de producidos esos hechos hemos ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra paz. (...) ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses en una tregua que ellos han roto con actos violentos, aunque esporádicos e inoperantes. Pero ello demuestra su voluntad criminal. (...) La contestación para nosotros es bien clara: no quieren la pacificación que le hemos ofrecido. (...) Por eso, yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya, establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten. (...) La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. (...) Y que sepan, también, que hemos de defender los derechos y las conquistas del pueblo argentino, aunque tengamos que terminar con todos ellos. (...) Que cada uno de ustedes recuerde que ahora la palabra es la lucha, se la

vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Y también que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. (...) [Nuestra] Nación necesita paz y tranquilidad para el trabajo, porque la economía de la Nación y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranquilidad. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo, y si no, a palos. (...) Pueblo y gobierno, hemos de tomar las medidas necesarias para reprimir con la mayor energía todo intento de alteración del orden. Pero yo pido al pueblo que sea él también un custodio. Si cree que lo puede hacer, que tome las medidas más violentas contra los alteradores del orden”.

Pero el discurso de Perón estaba basado en premisas inexistentes. En primer lugar, suponía el apoyo incondicional al gobierno por parte del Ejército (aunque más no sea del arma de artillería). Además, con toda seguridad un golpe de Estado contaría con la participación de la inmensa mayoría de la oficialidad de la Armada y con una fracción ahora sí más importante de la oficialidad del Ejército conmocionada por la política del gobierno que cuestionaba no sólo el papel de la Iglesia sino también el de las FF.AA. en cuanto depositarias exclusivas de la violencia.

¿Con qué fuerzas el gobierno hubiera podido reprimir un intento golpista? Podía contar probablemente con la policía, con la suboficialidad de las tres armas, con un sector de los soldados conscriptos, con una importante fracción (cuya extensión estaba probablemente en disminución) de la oficialidad del Ejército y con la amplia mayoría de la clase obrera. Pero para enfrentar una sublevación militar y contrarrestar el espíritu de casta de la oficialidad, Perón hubiera debido llamar a la suboficialidad de las tres armas y a los conscriptos a romper la disciplina militar y a armar a la población trabajadora. Más aún, hubiera debido llamar a los trabajadores a movilizarse hacia los cuarteles para hacer que tanto la suboficialidad como los conscriptos se convenciesen de la voluntad del gobierno y de las masas de luchar hasta el fin.

Pero jamás Perón podía hacer ese llamado por una simple razón : toda la estrategia de poder del peronismo contaba con *el apoyo unitario del Ejército y de su oficialidad*, mientras que para él la clase obrera era sí un importante factor social, *pero no de poder*, sino de apoyo a un programa y a un régimen burgués.

El armamento de las masas trabajadoras hubiera significado la guerra civil y, en caso de victoria, la destrucción del Ejército, cosa que la *oficialidad toda* no podía aceptar. No por nada en 1952 Perón hizo entregar al Ejército las armas que la CGT y la Fundación Eva Perón habían comprado con la intención de armar a los trabajadores en caso de golpe de Estado.

En otras palabras, el discurso de Perón no podía menos que provocar tanto una profunda inquietud y un reflejo de casta en toda la oficialidad del Ejército como la decisión de los golpistas de pasar rápidamente al ataque, justo cuando el “Líder” ponía todo el destino del régimen en manos de aquél. Días después, comenzaba el acto final del régimen peronista.

26.- A inicios de septiembre se produjo un intento fracasado de conato militar. La oposición comenzó a formar “comandos civiles”. El día 7 la CGT declaró estar dispuesta a formar milicias voluntarias y ponerlas a disposición del Ejército para impedir cualquier intento de golpe de Estado. Ante la negativa de su Comandante en Jefe, la CGT acató su decisión y se felicitó de la “identificación que existe entre el Pueblo y las Fuerzas Armadas de la Nación”. Los conjurados podían contar con que la CGT no llamaría a la formación de milicias obreras.

El 16 de septiembre, en Córdoba, una serie de Escuelas militares se sublevaron y se pusieron a las órdenes de un general y de un coronel retirados. Simultáneamente, las bases navales de Río Santiago (cerca a la ciudad de La Plata) y de Puerto Belgrano (cercana a Bahía Blanca) se declararon en rebeldía. Ya el día 18 de septiembre la situación de ambos focos rebeldes era desesperada por la intervención de la aeronáutica y la puesta en movimiento de fuerzas de artillería e infantería leales al gobierno. Las fuerzas rebeldes de Cuyo no se movilizaron en defensa de los sublevados de Córdoba a la espera de saber si no debieran huir en dirección a Chile⁷⁷.

Pero luego del bombardeo de depósitos de combustible en la costa por parte de la Armada, Perón entregó sorpresivamente el poder al Comandante en Jefe del Ejército para que éste decida un cese del fuego y entable negociaciones con los sublevados. Luego corrió a refugiarse en la Embajada de Paraguay.

Perón no llamó a las masas trabajadoras a movilizarse ni a la suboficialidad a rebelarse. El grueso del Ejército no adhirió a la asonada militar y el bonapartismo peronista se derrumbó sin combatir, sea por decisión de los altos mandos militares, sea por decisión de Perón mismo, por considerar que el ciclo del peronismo estaba agotado.

Para los altos mandos del Ejército el fin del régimen era la manera de mantener la unidad castrense y evitar un enfrentamiento con la Armada y un sector de la Aeronáutica. Como dice un proverbio popular : “Entre bueyes no hay cornadas”.

En cuanto a la otra pata del bonapartismo peronista, el 18 de septiembre la CGT llamó a los trabajadores a “mantenerse en sus puestos de trabajo” y no los convocó a “dar la vida por Perón” - ya que Perón y los mismos jefes del régimen no estaban dispuestos a ello - y decidió “desensillar hasta que aclare”. Con los militares ya en el poder, el 24 de septiembre la CGT llamó a la paz social :

“La CGT se dirige una vez más a los compañeros trabajadores para recordarles la necesidad de mantener la mayor calma y asegurar normalmente su trabajo (...) Cada trabajador en su lugar, comprometido con el restablecimiento de la concordia, debe demostrar al mundo que en la Argentina hay un pueblo de hombres de bien. Sólo la paz de los espíritus puede permitir

⁷⁷ A. Rouquié, *op.cit.*, pp. 428-432.

*promocionar la grandeza nacional, y reforzar así las conquistas sociales. Miremos hacia delante, tengamos confianza, el resto, la patria os los dará con creces*⁷⁸.

El régimen peronista rindió su último suspiro sin que ninguno de sus adalides se movilizara en su defensa. La clase trabajadora que creyó en el peronismo como vía de su emancipación social deberá pagar muy caro la ilusión de haber puesto su destino en manos de un reformismo burgués, de burócratas sindicales y de un poder bonapartista.

En otro capítulo abordaremos las vicisitudes de la lucha de clases en Argentina durante el período inmediatamente posterior a la caída del régimen peronista. Pero, antes de quitar el período tratado aquí, quisiéramos detenernos en un pasaje del discurso de Perón del 31 de agosto de 1955, cuando afirmó : “[Nuestra] nación necesita paz y tranquilidad para el trabajo, porque la economía de la Nación y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranquilidad. **Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo, y si no, a palos**”.

De 1946 a 1955, el régimen peronista no dudó un solo instante en recurrir a la represión de los trabajadores que con sus luchas rompieron “la paz y la tranquilidad para el trabajo” saliéndose de los cauces aceptables para el régimen. Lo mismo ocurrirá 17 años más tarde, pero con un nivel de intensidad muchísimo más elevado, cuando el peronismo nuevamente en el poder echará mano al terrorismo estatal y paraestatal para combatir las luchas de las masas proletarias y de las vanguardias militantes contra el régimen burgués y su Estado.

⁷⁸ *Ibidem*, pp. 433.